

DOS MODELOS ECONÓMICO-SOCIALES EN ARGENTINA: PRINCIPALES ESTRATEGIAS Y CONTRADICCIONES

ALEJANDRO ROFMAN*
CARLOS FIDEL**

INTRODUCCIÓN

Nos proponemos presentar y discutir los contenidos básicos de dos modelos de organización de la sociedad, que enmarcan los senderos por los que se configuran y transitan los actores políticos y sociales, hoy en pugna en Argentina. En rigor, los dos modelos vienen delimitando los ejes de las políticas económicas y sociales —tanto estatales como privadas— del proceso de acumulación de capital en nuestro país desde hace décadas.¹

En los inicios del año 1976, desde el abandono del esquema de sustitución de importaciones —basado principalmente en la dinámica del mercado interno—, un modelo neoconservador se reinstala con mucha mayor intensidad, cuando la última dictadura cívico/militar, con un régimen de terror estatal, comienza a implantar una política concentradora del ingreso, de fuerte e irrestricta apertura al mercado externo.

A lo largo de este trabajo nos centraremos en la presentación de lo acontecido en los años de la post dictadura y pondremos nuestro foco en el proyecto que se inicia en el 2003. Desde una mirada analítica, presentaremos las principales características de dos modelos en pugna por hegemonizar el poder con el fin de componer la esfera económica-social en la sociedad argentina. Aquí los denominamos: “progresista y de empleo”, frente a otro que definimos como “conservador y de mercado”. Posteriormente presentamos las principales características de la aplicación práctica de ambos modelos en las últimas décadas, exponiendo los posibles escenarios que pueden acontecer en el país.

* Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Asesor de la Comisión Nacional de Microcrédito. Investigador principal del CONICET en CEUR/CONICET.

** Docente investigador Consulto Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

¹ La primera parte del trabajo se encuentra en Rofman y Fidel (2012), “Modelos económicos-sociales en Argentina: la disputa continúa”, en José Luis Calva (coord.), *Estrategias económicas exitosas en Asia y América Latina*, México, Consejo Nacional de Universitarios/Juan Pablos.

En adelante el lector encontrará un abordaje de la historia social y económica actual, enfocado centralmente en un acontecer pleno de conflictos y/o acuerdos que atraviesan la trama de la coyuntura actual, posteriores a que la Alianza Cambiemos ganó las elecciones a fines de 2015. Por lo anterior, esa parte del trabajo está encarado poniendo el acento en los escenarios inmediatos que se van dibujando en la realidad cotidiana a partir de la descripción de los procesos económicos y sociales que suceden en el espacio público nacional.

En la medida que se examina un proyecto que está en plena marcha, no podemos disponer de certezas plenas de lo que va a surgir como desenlace obligado de su transcurrir en determinados plazos y escenarios en que, eventualmente, ese desenlace va a tener lugar. Daremos cuenta al respecto, de opiniones de analistas con sólida formación, que se aventuran a predecir un final profundamente perjudicial para los más amplios sectores de la sociedad que se inscriben en los mayoritarios segmentos de la misma, de bajo nivel adquisitivo para afrontar su subsistencia.

En nuestro país hay valiosos antecedentes cercanos de los muy dañinos impactos que inevitablemente se produjeron en la trama social colectiva, cuando experiencias neoconservadoras previas se derrumbaron, con el consiguiente de un muy elevado costo social a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad.

Nuestro enfoque es dejar al lector que arme su propia respuesta sobre el futuro del desenvolvimiento económico y social a partir de las evidencias que ilustran el transcurrir del proceso de acumulación hoy vigente en Argentina.

Al cierre del estudio haremos mención a los perfiles de una política económica que a medida que se va consolidando rediseña el mapa económico y social, en el cual va dejando actores sociales favorecidos, mientras otros son perjudicados por el proceso de acumulación y distribución que recorre un itinerario neoconservador, repleto de iniciativas que configuran un ramillete de contra reformas que se encaran desde el poder y reestructuran el Estado, el que se va modificando a medida que implementa el proyecto encarado por la gobernante alianza política-social denominada Cambiemos.

PRINCIPALES SUCESOS PRECEDENTES

Reflexiones en torno al desenvolvimiento de Argentina

La exposición del trabajo requiere un antecedente ineludible de una rápida caracterización histórica de la República Argentina, señalando los aspectos

relevantes de la temática que abordamos. Como la mayoría de otros países de América, Argentina se constituye como república hace alrededor de 200 años, en una coyuntura internacional favorable propiciada por cambios en los centros de poderes imperiales; al tiempo que se produce la consolidación de las fuerzas políticas locales que se inclinan hacia una transformación independentista. En esos momentos, por lo menos en el campo de las ideas, se inicia el esbozo del diseño y la controversia de dos proyectos fundacionales que recorren su acontecer histórico.

Un proyecto representa el propósito de configurar una nación agroexportadora, sustentada en las ventajas naturales estáticas que provienen de los extensos territorios y la fertilidad natural de la región pampeana; tierras que fueron apropiadas de manera brutal despojando a los pueblos originarios, y además contando con una mano de obra dócil y barata de trabajadores del campo, llamados “gauchos”.

El otro modelo de organizar el país representa la propuesta de un esquema productivo diversificado, que intenta dinamizar las ventajas del agro combinadas con la ampliación de los sectores de base industrial. Esta proposición se basa en el hecho de que Argentina se abrió a las corrientes de inmigración que, por oleadas, provenían de las zonas más pobres de Europa, las cuales poblaron el extenso territorio y fueron construyendo los asentamientos urbanos, en especial un intenso flujo se localizó en la ciudad puerto de Buenos Aires. Los grandes centros urbanos se expandieron luego de la mitad del siglo XX con el aporte de las migraciones internas y de las corrientes provenientes de los países limítrofes.

Los dos proyectos transitaron distintas etapas de confrontación. En el siglo XX, en los momentos que los países centrales pasaban por crisis económicas, como la de los años treinta, o por guerras mundiales, en Argentina se producían fenómenos de industrialización que se sustentaban en la sustitución de importaciones.

En la dimensión política, la organización republicana estaba atravesada por distintas fuerzas políticas que tenían visiones institucionales diferenciales: algunas estaban impregnadas de sostenes autoritarios, otras eran más democráticas más o menos participativas. El mapa político se expresó, en varias ocasiones, con intervenciones de gobiernos militares y en la configuración de una disminuida ciudadanía. En ese contexto, se fue conformando un Estado que en todos sus estamentos mostraba, a su interior y en relación con la sociedad civil, ensambles débiles, poco eficientes y corruptos; sumado al hecho de que la mayor parte de la población era y es urbana,² pero con la característica de que la morfología de ocupación del territorio devino en

² Alrededor del 80% del total de la población.

urbes desestructuradas, fragmentadas, exponiendo un mapa con la mayoría de población localizada en unas pocas ciudades.

En el último cuarto del siglo XX, en marzo de 1976, a partir de la interrupción del Estado de derecho por el último golpe militar llevado a cabo por una alianza ideológica entre sectores militares y civiles, se produjo un proceso de cambio en los soportes de organización estatal, institucional y la organización económica-social: por ello se fue delineando un nuevo trazado de las relaciones sociales que modificó sustancialmente a la distribución del ingreso y la estructura de las fuentes de trabajo. Es de señalar que en el período que gobernó la dictadura cívico-militar, la deuda externa se incrementó en alrededor de 465% (Fidel, Tomaso y Farias, 2010).

Los actores que apoyaron el golpe institucional se unían en una misma visión fundacional que buscaba instituir un nuevo modelo de país. Respaldados en la fuerzas de la represión, se intentó instaurar un proceso que derivara en un nuevo “proceso y orden de organización” social, mediante la aplicación de políticas económicas y sociales enmarcadas en una burda y esquemática versión del paradigma neoliberal.

Con algunas variantes, el proyecto neoliberal continuó posteriormente a la recuperación de la democracia, los gobiernos que comienzan a partir de 1983 adoptaron el discurso que predominaba a nivel global, al tiempo que se fue consolidando una configuración de un mundo de hegemonía unipolar de Estados Unidos. La estrategia económica y social sostenía la eficiencia imbatible del funcionamiento del libre “mercado”, mecanismo para disponer de los recursos por donde debería transitar el eje y la forma de organizar la sociedad y, luego, con la incorporación de las tecnologías de base digital se aceleraron los modos de integración al resto del mundo. A partir de fines de los ochenta, se implementaron acuerdos de liberalización de los canales de comercialización, en principio entre cuatro países limítrofes del sur de América.³ En los años posteriores el Mercosur se fue ampliando a otros países de la región como miembros plenos o asociados.

Los efectos socioeconómicos de las políticas públicas aplicadas en los noventa

El gobierno que asume a fines de los ochenta con el sostén de los votos, acentúa la morfología socioeconómica que se fue estableciendo en la década de los noventa, la cual se reflejó en un alto nivel de concentración de la riqueza en segmentos muy reducidos de la población; en la desconcentración y achi-

³ En 1991 se conformó el Mercosur, integrado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

camiento de la incidencia del aparato y funciones estatales; en la inconexión de la actividad del sistema bancario y financiero respecto al comportamiento productivo; y en el desacoplamiento de los eslabonamientos productivos internos y la intensa transnacionalización empresarial de los circuitos productivos, de servicios y financieros.

La política de tipo de cambio establecida en los noventa, promovió las importaciones y obstaculizó las exportaciones, especialmente las de orígenes industriales. En consecuencia se fue estructurando un fuerte proceso de desindustrialización; en tanto que el perfil económico, utilizando las ventajas fijas y naturales, se fue especializando en la ampliación de la frontera productiva del sector primario y en el crecimiento de los procesos de transformación de esa producción. La ampliación del crédito hipotecario orientó a un segmento significativo de las nuevas inversiones hacia el sector de la construcción y el mercado inmobiliario, ampliando la oferta de bienes inmobiliarios de los segmentos más caros, creando nuevos productos en zonas cerradas en área suburbanas o en complejos habitacionales con sofisticados satisfactores internos al terreno.

Esta considerable conversión de la producción y el consumo fue acompañada por una descomunal expansión de la segregación social y la fragmentación territorial. Una de las principales consecuencias en la dimensión territorial, especialmente en el uso, distribución y apropiación del espacio urbano, fue que tendió a profundizar la segmentación socioespacial y constructiva.

También se registró la ampliación del desempleo, aunado a la aparición de la expansión de relaciones laborales informales y exclusión social, que afectó especialmente a los sectores históricamente más vulnerables, sumando de manera creciente nuevos afectados por el brutal empequeñecimiento de las posibilidades concretas de inserción en el mercado laboral.

Incorporado al anterior escenario, es de señalar el descreimiento y descomposición de toda forma orgánica y representativa del funcionamiento de distintas instituciones políticas, culturales y, en menor medida, las de carácter religioso y educativas (Fidel, Tomaso y Farias, 2007).

El diseño del “plan de convertibilidad”, a cargo del ministro de Economía, Domingo Cavallo, se comenzó a aplicar en 1991. Tenía como un eje central, en el trazado interno, el de generar las bases para fundar una plena estabilidad de las variables monetarias de largo plazo. Dicho objetivo se respaldaba en la creación de una unidad monetaria directamente ligada al comportamiento del dólar estadounidense, conformando de tal modo un instrumento de política monetaria rígido que acotaba la cantidad de unidades monetarias que circulaba internamente a la medida disponible de reservas en divisas exter-

nas. Uno de los objetivos de este instrumento fue acotar y ajustar el comportamiento del gasto público a la disponibilidad de monedas extranjera. Conviene recordar que para sostener este modelo, en el periodo referido al gobierno, a cargo de Carlos Saúl Menem, la deuda externa se incrementó en un 120 por ciento.

A la dimensión anterior se le sumaba un eje de política externa que buscaba abrir íntegramente la economía argentina al mercado mundial, con las metas de procurar la modernización de los procesos de producción y consumo, adoptando las nuevas tecnologías de base digital en la comunicación y organización de los circuitos de producción y circulación de los bienes y servicios.

NUEVO SIGLO: INICIO DE OTRO MODELO

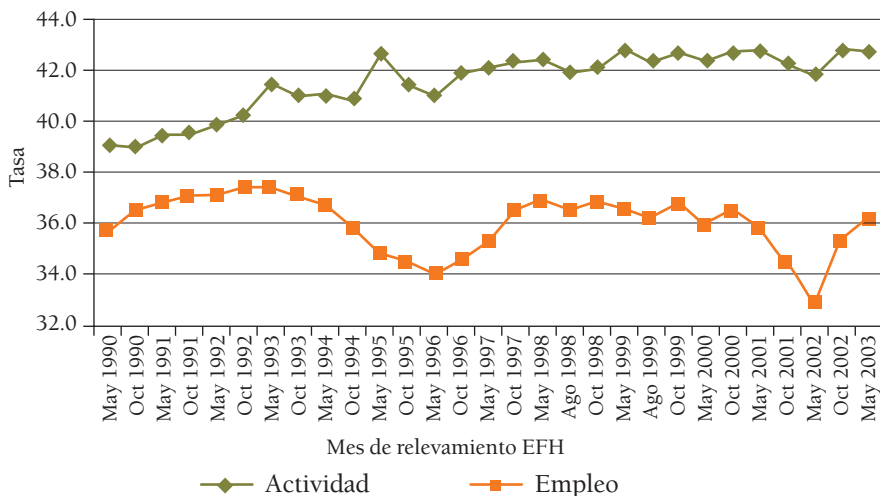
Como se ha presentado en los apartados anteriores, la profunda transformación de la sociedad argentina, que en el año 1976 se planteó sostenida en la brutal represión y obturando el funcionamiento de las instituciones democráticas, no culmina con la definitiva puesta en marcha de las estrategias contenidas en ese modelo. De ello se encargará, con fuerte intensidad, a seis años de la vuelta a la democracia, el periodo menemista y su continuación: el del gobierno radical de Fernando de la Rúa.

La aplicación de distintas variables del modelo neoliberal transitó en ese lapso por intensos altibajos en el comportamiento de la producción y el empleo, creando las condiciones de inestabilidad que culminó con la fuerte crisis monetaria, productiva, social y política de fines del años de 2001. Una de las “rarezas” de la historia es que el economista ultraliberal Domingo Cavallo, el autor y ejecutor del plan de convertibilidad (1991), fue justamente ministro de Economía cuando se desató la crisis; así se asistió a que el creador del programa neoliberal, fue luego el que ocupó el lugar del sepulturero del mismo, teniendo que renunciar acompañado por el rechazo de la mayoría de la población.

Tras el derrumbe de la política económica neoliberal —basada en un tipo de cambio fijo para favorecer el desarrollo de una estrategia de pago viable de la deuda pública, de amparo a los capitales especulativos financieros y de apertura externa favorecedora de las importaciones sustitutivas de la producción y el trabajo nacional— un nuevo escenario se inició.

En el 2002 se desató una desarticulación social, institucional, económica y financiera que tuvo efectos múltiples. A nivel de las respuestas sociales se registraron:

GRÁFICA 1
TASAS DE ACTIVIDAD Y EMPLEO PARA EL TOTAL DE AGLOMERADOS URBANOS
DESDE MAYO DE 1990 HASTA MAYO DE 2003



FUENTE: INDEC, EPH Continua.

- Acentuación de las búsquedas de salidas individuales, muchas de ellas, optando por los senderos informales y/o al margen de la legalidad.
- Profundización y desarrollo de los lazos sociales y la creación o ampliación de nuevos movimientos sociales basados en organizaciones de índole asociativas y solidarias.

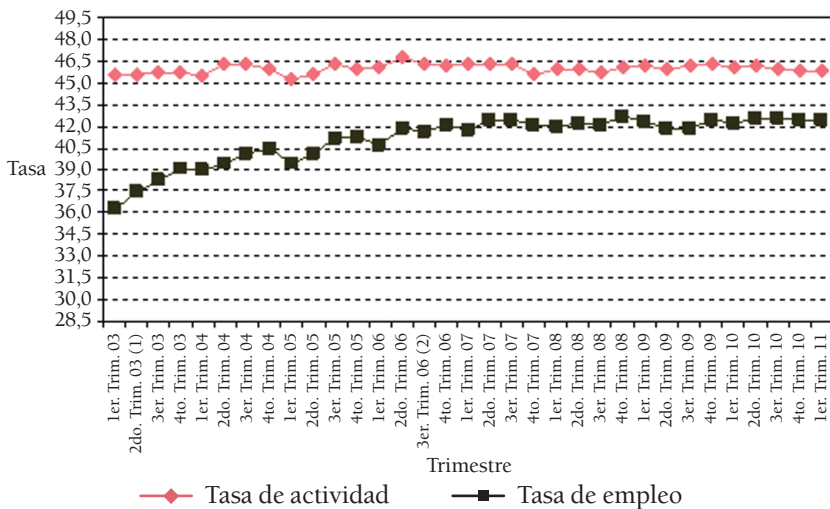
En esta última dimensión hay que marcar ciertos modos de organización de nuevos movimientos sociales. Señalaremos los principales: los motivados por los afectados por la crisis del sistema bancario; los de carácter territorial urbano, diferenciando las distintas corrientes de los movimientos de desocupados (piqueteros), algunos inaugurando nuevas modalidades de construcción del hábitat y/o formas productivas, y también emergieron nuevas modalidades asociativas en torno a asambleas barriales, fenómeno que se registró especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Algunas de estas formas organizativas de base popular fueron efímeras, mientras otras resisten el paso del tiempo.

Desde el Estado se adoptaron respuestas tardías, la estrategia gubernamental se desplazaba como si la crisis fuera una recesión más y/o un pasaje transitorio por una catastrófica situación inevitable que cada cierto periodo atraviesa al país. En el plano social, se empezó a distribuir una transferencia de ingresos, consistente en una suma de dinero en efectivo destinada a la población más expuesta a la crisis. La administración y gestión de los pe-

queños montos asignados a los responsables de las familias expulsadas del mercado laboral, fue resuelto unilateralmente desde la esfera del Estado. Su instrumentación estuvo marcada por procedimientos pocos transparentes y sin una activa participación de los actores sociales involucrados.

A partir del año 2003 y hasta nuestros días, desde el gobierno nacional se propuso decididamente —con avances y retrocesos, aciertos y errores— *desplegar una política económica y social basada en una sociedad de trabajo, inclusiva y con creciente redistribución progresiva del ingreso*. Los logros están a la vista y las asignaturas pendientes no son pocas. Lo más destacado de este período, aún abierto, es la *valorización del trabajo como eje central del proceso de recuperación de la economía que en 2002 sufrió el más importante retroceso desde 1930*. En ese sentido, es de destacar que el producto nacional de Argentina creció sostenidamente a tasas del orden de 9% durante el periodo 2003-2008, acoplado a una fuerte tasa de crecimiento del empleo.

GRÁFICA 2
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD Y EMPLEO EN EL TOTAL DE AGLOMERADOS DESDE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2003 EN ADELANTE

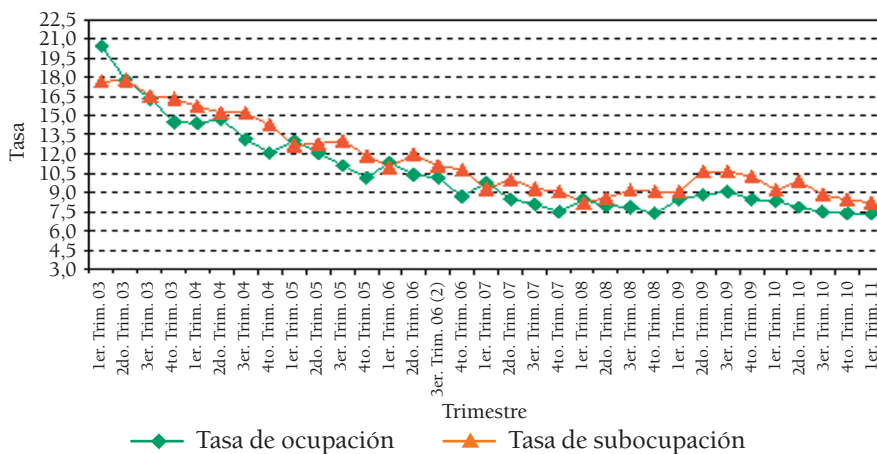


FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos, EPH, República Argentina, INDEC.

La traslación del efecto del ciclo acelerado de crecimiento económico entre el año 2003 y 2008 sobre el mundo del trabajo, se verificó de modo positivo en la creación de más de cuatro millones de empleos, la mayoría de ellos de carácter formal, unido a la reducción de las situaciones de carencias sociales de millones de argentinos y en las mejoras obtenidas en las remuneraciones básicas de los trabajadores activos y pasivos.

Esta misma lógica de la política económica se traduce en la estrategia que se diseñó para enfrentar el impacto altamente negativo de la crisis del capitalismo mundial que se desató en los países centrales en septiembre de 2008. La política de respuesta a esa crisis, que emanó del gobierno nacional, consistió en la defensa irrestricta de las fuentes de trabajo en todo el territorio nacional. Las decisiones que se han venido adoptando demuestran fehacientemente cuál es el perfil de la citada estrategia. No se verificó el cierre de ninguna fuente importante de trabajo, política que se instrumentó con la presencia protagónica del Estado, que llevó a cabo iniciativas de múltiples facetas apoyadas por los trabajadores involucrados. Este modelo contrasta con la persistente destrucción de plazas laborales que se verificó en otras economías, tanto de países periféricos como centrales. Diariamente, las noticias que llegaban desde tales países ilustran sobre el recurrente proceso de cierre de empresas y de expulsión de centenares de miles de trabajadores de sus empleos.

GRÁFICA 3
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS TASAS DE DESOCUPACIÓN
Y SUBOCUPACIÓN EN EL TOTAL DE AGLOMERADOS URBANOS
DESDE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2003 EN ADELANTE



FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos, EPH, República Argentina, INDEC.

Otro aspecto que es necesario señalar es lo referido a la reestructuración de la deuda externa. Conviene recordar que con la crisis de diciembre de 2001, Argentina entró en cesación de pagos (*default*) de su deuda externa. Esa situación se mantuvo hasta el 14 de enero de 2005, cuando se comenzó a transitar por la operación de “canje” de la deuda en *default*. La renegociación de la deuda externa fue un trámite complejo, los acreedores que aceptaron el canje recibieron el pago con descuento importante, alrededor del

76%. La renegociación incluyó al FMI y a otros organismos internacionales, a quienes se les irían pagando las deudas.

En diciembre de 2005, el gobierno de Néstor Kirchner decidió pagar la deuda con el FMI, por un total de 9 810 millones de dólares, utilizando las reservas internacionales que alcanzaron en ese momento un monto de 28 mil millones de dólares. El pago en parte fue financiado por Venezuela, quien compró obligaciones argentinas por 1 600 millones de dólares. Casi al mismo tiempo, Brasil también canceló la totalidad de su deuda con el FMI. En Argentina, el superávit del comercio exterior permitió que en septiembre de 2006, las reservas volvieran a alcanzar el nivel previo a la cancelación total de deuda con este organismo; posteriormente las reservas monetarias en moneda externa continuaron creciendo.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández continuó con la negociación de pagar la deuda externa pendiente, uno de los acreedores era el denominado Club de París, al que se le debían unos 6 500 millones de dólares; otros fueron tenedores privados de bonos de la deuda argentina por unos 20 mil millones de dólares. La negociación del pago de la deuda externa implicó fuerte tensiones internas, pero su implementación permitió un mayor margen en el diseño de la política económica y social.

En el periodo analizado, la ampliación de la demanda global creó un indeseado fenómeno colateral: el resurgimiento de la inflación. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) no coinciden con las apreciaciones de las consultoras privadas, creando un debate todavía no resuelto. Sin embargo, más allá de cuál es la cifra más cercana a lo que acontece en la realidad, es indudable que el nivel de precios sube cada mes; y el sector donde más se incrementan los precios es el de bienes y servicios de consumo masivos.

¿Cómo explicar esta situación? Puede tener muchas respuesta y seguramente en cada actividad puede haber una justificación distinta. Nuestra mirada se dirige a señalar en el origen al movimiento de la inversión bruta interna. La misma tiene un componente externo, en ese sentido a las inversiones de origen estadounidense, en los últimos años se le agregaron europeas, canadienses, brasileñas y en cierta medida las mexicanas; muchas de ellas se incrementaron notablemente. Las inversiones de capitales internos, especialmente en el sector industrial, las realizadas por las medianas y pequeñas empresas, también crecieron. Pero se viene produciendo una doble situación: por un lado, las expectativas de que van a seguir subiendo los precios lleva a que los empresarios preventivamente aumenten los precios de sus productos; aunado a que las inversiones son insuficientes para atender la ampliación y la demanda total.

En síntesis podemos puntualizar los principales aspectos de la política económica y social instrumentada a partir de 2003:

- Manejo gubernamental administrado del tipo de cambio: flexible, con compras y ventas de la autoridad monetaria para evitar fuertes apreciaciones.
- Reestructuración de la deuda externa.
- Mayor margen de autonomía de la política interna en relación con los organismos multilaterales de crédito.
- Superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
- Altas reservas de moneda externa.
- Cuentas fiscales equilibradas o superavitarias.
- Políticas para sostener el nivel de empleo.
- Activa política económica de apoyo al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
- Activa política social de transferencia de ingresos destinados a mejorar las condiciones de vida de los segmentos más desposeídos.
- Impulsos en la generación de espacios de funcionamiento de la economía social.
- Ampliación y profundización de los convenios y los intercambios con los países de la región.

Para comprender el actual apoyo ciudadano que registra el gobierno, también hay que considerar otras iniciativas de transformación que se llevaron a cabo en otras dimensiones de la gestión gubernamental, tales como los derechos humanos individuales y colectivos, agregado a las iniciativas institucionales, culturales y sociales. Su análisis no está comprendido en este trabajo, sin embargo su abordaje es imprescindible para tener una visión completa del proyecto que se inició en el año 2003.

ESCENARIOS POSIBLES

El futuro escenario de la política económica y social argentina va a transitar por una u otra de las opciones que se ilustran en la tabla 1. Si se persiste en la defensa de una estrategia basada en la sociedad de trabajo, el esperado proceso de recuperación de nuestra actividad productiva —que conserva vitalidad en amplios sectores y respaldo financiero tanto estatal como privado— se puede aguardar un renovado proceso de desarrollo con equidad social. El otro modelo, ya experimentado por los argentinos a partir de 1976 hasta el 2001, sólo depararía un fuerte retroceso de carácter regresivo con efectos altamente destructores del tejido productivo y social.

Para una comprensión integral de los dos modelos en pugna, damos cuenta en la tabla 1 de cuáles son los componentes básicos de las acciones políticas, así como sobre sus protagonistas singulares y sus beneficiarios en cada una de las dimensiones donde se manifiestan los procesos característicos de dichos modelos.

Se puede reconocer la fuente de inspiración del modelo del “empleo” en el pensamiento keynesiano, en tanto que el modelo “conservador” emerge de la teoría económica neoclásica. En la realidad, la aplicación de los dos modelos no se realiza como si fueran dos estrategias absolutamente diferenciadas; hay zonas grises donde se pueden registrar políticas de uno u otro modelo a lo largo del periodo considerado; lo que queremos señalar es el predominio de una estrategia sobre la otra.

En los tiempos por venir hay muchas opciones, sin embargo, sostenemos que se enmarcan en los senderos siguientes:

Seguir profundizando el modelo progresista de sociedad de trabajo con un esquema progresista, incorporando las rectificaciones que correspondan y agregando todas las medidas que los vayan perfeccionando.

Volver a recorrer el camino que descansa en el funcionamiento del mercado de matriz conservadora, con los costos sociales y económicos que manifiestan sus resultados en el registro de la historia.

Desde nuestra perspectiva, enunciarnos que la profundización de la política “progresista” o de afianzamiento de la sociedad de trabajo, requiere mayor acentuación presente y futura *de la redistribución del ingreso y la riqueza*.

En el amplio conjunto de iniciativas a adoptar figuran, en lugar destacado, decisiones relativas a la extensión de las difundidas y exitosas experiencias de emprendimientos provenientes de la “economía social”, solidarias y no atadas a fines de lucro, en el espacio de los sectores populares urbanos y rurales. Asimismo, deben sumarse renovadas estrategias de impulso a la formalización del empleo y a la extensión de la regulación laboral en sectores del trabajo aún carentes de normas ajustadas al derecho de trabajo, así como la rápida formalización de los trabajadores no registrados y la abolición de las formas de “tercerización” del empleo. Los anteriores aspectos tendrán que ocupar los objetivos más relevantes de la agenda pública para poder sostener el modelo del empleo en el tiempo.

Además, el fortalecimiento de las prácticas que desde el punto de vista social y ambiental constituyen el modo operativo tradicional de los agricultores familiares, tendrán que asumir creciente presencia. Ello se torna una meta pendiente necesaria, en tanto que es un modo de producción mayoritario en actores sociales localizados en el agro argentino.

Las necesarias modificaciones al sistema tributario, la sanción de una nueva Ley de Entidades Financieras —cuyo proyecto está en inicio de

TABLA 1
 CONTENIDOS BÁSICOS DE ACCIONES POLÍTICAS
 Y BENEFICIARIOS DE LOS DOS MODELOS EN DISPUTA

Primera parte

<i>Dimensiones o procesos</i>	<i>Modelo económico progresista o de Sociedad de Trabajo</i>	<i>Modelo económico conservador o de Sociedad de Mercado</i>
Economía	Sostenida por la deliberación política.	Se convierte en el dominio de los técnicos sobre la política.
Estado	Actor principal en la economía de un país, fijando prioridades productivas con el conjunto de la sociedad.	Marco jurídico para la realización y protección de los negocios de las corporaciones.
Mercado	Mercado sometido a los controles estatales. Aliento especial a los procesos solidarios basados en la economía social.	Mercado sin controles estables; economía sometida a la ley de la oferta y la demanda dominada por los grandes grupos económicos.
Agro	Actividad productiva basada en procesos social y ambientalmente sustentables. Aliento de la agricultura familiar destinada a lograr la plena soberanía alimentaria nacional. Agricultura con agricultores.	Actividad tendiente a la consolidación de una economía agroexportadora basada en procesos rentístico-financieros. Agricultura sin agricultores.
Industria	Depende del desarrollo del mercado interno y de la limitación de las importaciones; industrialización para sostener el empleo urbano y crear valor agregado.	El consumo de productos industriales depende de la importación: desindustrialización nacional.
Organización del mercado mundial	El país se desarrolla a través de tramas productivas diversificadas, con reparto equitativo de excedentes entre los agentes económicos involucrados, integrándose al comercio internacional a través de acuerdos regionales.	Países especializados en determinadas producciones en términos de ventajas comparativas estáticas, abandonando otras a la importación. Argentina como país agrícola-ganadero.
Mundialización	Organización de acuerdos regionales (MERCOSUR, UNASUR) que se insertan con agenda propia al capitalismo global.	Globalización como única lógica del capitalismo para todas las regiones por igual, que beneficia a los países centrales.
Riqueza	Redistribuida por el Estado, lo que supone la democratización del acceso al crédito, al capital, a la tecnología, al conocimiento y al excedente económico.	Teoría del derrame: primero acumular y después distribuir. La distribución depende de las relaciones de poder dentro de la sociedad, que determinan un dominio acentuado del sector más concentrado.
Crecimiento	Mercado interno como instrumento de integración nacional. Esto supone la desconexión de los precios internos de los externos, mediante el cobro de	El dinamismo de una economía se logra por el desarrollo del mercado externo; por eso se supone la necesidad de salarios bajos para hacer más competitivas las exportaciones.

TABLA I (CONTINUACIÓN)

<i>Dimensiones o procesos</i>	<i>Modelo económico progresista o de Sociedad de Trabajo</i>	<i>Modelo económico conservador o de Sociedad de Mercado</i>
Crecimiento	los derechos de aduana a la exportación por parte del Estado y la limitación de importaciones.	
<i>Segunda parte</i>		
Crédito	Debe expandirse a empresas y personas. La obra pública financiada por los créditos locales o de banca pública regional (Banco del Sur).	Disminución del crédito barato; y endeudamiento externo del país para la realización de obras públicas.
Balanza comercial/fiscal	Superávits mellizos genuinos desde el año 2003 en adelante (el fiscal y el de comercio exterior).	Déficits compensados con más endeudamiento externo.
Tipo de cambio	Tipo de cambio alto y competitivo que garantice la salida exportadora creciente, torne los productos cada vez más competitivos y amortigüe la competencia externa de los productos importados. Impuestos selectivos contra el ingreso irrestricto de divisas para especulación.	Tipo de cambio libre, preferentemente bajo para permitir la importación de bienes del exterior provenientes de las grandes multinacionales (maquinarias, bienes de consumo, productos intermedios, etc.) Posibilidad de entrar y salir libremente con capitales, a un tipo de cambio prefijado para negocios financieros de cortísimo plazo.
Empleo	Intenta fortalecer el empleo formal en las aglomeraciones urbanas y del área rural a través del incremento de la actividad productiva, con la agregación de valor y de los servicios asociados a ella, estimulando el incremento del empleo.	Intenta fortalecer la ganancia del capital concentrado, con políticas de ajuste y flexibilización del trabajo.
Salarios	Salarios como determinantes del desarrollo del mercado interno. A mayor salario mayor gasto; a mayor gasto más crecimiento de las industrias y mayor empleo. Salario real creciente.	Salarios bajos para hacer más competitivos los productos, porque el salario se considera como la mayor incidencia en el valor final del producto. Para esto hace falta una masa de desempleados a modo de hacer que sea menor la demanda de trabajo que la oferta.
Impuestos	Sobre los beneficios y la riqueza acumulada y sobre la exportación de bienes con alto contenido de renta de la tierra.	Impuestos bajos sobre la riqueza, alentando la supuesta capitalización de los más ricos; y bajas tasas porcentuales sobre las ganancias.
Tipo de interés	Aliento a tasas de interés activas iguales o menores que la tasa de inflación y otorgadas con criterios selectivos según grupo social y destino productivo, con subsidios para bajar las tasas citadas lo máximo posible.	Total libertad del sistema financiero para fijarlos, sin prioridades ni beneficios selectivos.

tratamiento en el Congreso— y normas de control sobre los numerosos emprendimientos mineros, así como la aplicación total de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, formaron también parte esencial de este proceso en marcha de profundización del modelo de sociedad de trabajo.

Los poderes reales que conforman la oposición al intento de acentuar un perfil progresista y de afirmación del proceso de redistribución progresiva del ingreso y la riqueza, sin duda se expresarán de manera enconada acentuando su oposición con rasgos destituyentes. La resolución de las tensiones de los dos modelos en pugna no tiene un pronóstico único y necesario, depende de múltiples cuestiones que inciden en la configuración y despliegue del bloque del poder hegemónico.

En el tema que estamos analizando, es de señalar la tensión entre dos conjunto de actores: por un lado, las estrategias y acciones concretas de los actores con poderes reales que actúan en el escenario político y económico; por otro, en una sociedad plural y democrática como es la Argentina actual, las opciones de la mayoría de los ciudadanos serán los que marquen el rumbo y el ritmo del cambio que adopte el país.

ESTRATEGIA Y CONTRADICCIONES DEL MODELO CONSERVADOR O DE SOCIEDAD DE MERCADO EN LA ARGENTINA ACTUAL

En este apartado abordaremos una serie de consideraciones generales sobre el diseño de la política económica y social de signo neoliberal, que se ha instalado desde el inicio de la gestión del gobierno nacional a partir del 10 de diciembre del año 2015.

El propósito es examinar críticamente los actuales núcleos de poder político y económico que se situaron en las esferas gubernamentales, los que fueron modificando la acción estatal, con la finalidad de identificar las repercusiones que se están produciendo en el desempeño de los sujetos sociales localizados en el país.

Uno de los interrogantes que atraviesa esta parte del trabajo es identificar las razones de por qué ganó las elecciones del 2015 la Alianza Cambiemos con un proyecto “económico conservador o de mercado”. Es de señalar que uno de los rasgos de esa alianza está conformada por una parte de la fuerza política tradicional denominada “Partido Radical”, que estaba en franca decadencia pero que mantenía una representación en casi todo el territorio nacional, que se acopló a una nueva fuerza política denominada PRO conducida por el ingeniero Mauricio Macri.

Dicho político es hijo de un poderoso empresario inmigrante italiano que llegó a Argentina después de la segunda guerra y que se enriqueció en este

país encarando diversos negocios; particularmente se dedicó a la obra pública, ampliando notablemente su patrimonio en los tiempos de la última dictadura cívico-militar que gobernó el país aplicando una fuerte represión entre 1976 hasta 1982.

La Alianza Cambiemos configuró una “maquina electoral” muy eficaz y que utiliza modernos instrumentos discursivos e intervenciones operativas de soporte digital de última generación. Esa máquina electoral se presentó como una fuerza que iba a mantener y mejorar los derechos sociales y económicos que se habían avanzado en la gestión anterior. Además, los medios de comunicación más concentrados apoyaron abiertamente esta opción política, enfrentándose a la gestión de Cristina Fernández.

En una porción de la población había una cierta fatiga política de la corriente política que había gobernado 12 años, además los candidatos no eran los que generaban la mayor simpatía y consenso en buena parte de la ciudadanía; tampoco supieron presentarse como una fuerza superadora de la gestión anterior.

En los párrafos anteriores se encuentran sintetizados unos de los aspectos que explican políticamente las razones de por qué una fuerza de derecha conducida por un empresario ganó las elecciones de fines de 2015.

Circunstancias contextuales

En las elecciones realizadas en noviembre de 2015, la alianza electoral arriba citada obtuvo los votos necesarios para ganar en una segunda vuelta por 2% de diferencia con el segundo agrupamiento político, la que postulaba una continuación de la política económica y social vigente entre 2003 y 2015. Así, se instala en el gobierno nacional el frente político “Cambiemos”. De este modo se da inicio al modelo político y económico neoconservador, instrumentando un régimen neoliberal sustentado en una estrategia extractivista, localizados en las actividades agrarias y financieras. Se configura, de esta forma, un proyecto económico que robustece los excedentes de la renta de la tierra que se generan en el sector primario, sumado a las ganancias procedentes de la valorización especulativa de la renta financiera.

Los antecedentes previos y más recientes al proyecto económico que se está implementando, se pueden ubicar en la iniciativa de construir un capitalismo neoliberal que se llevó a cabo en la última dictadura cívico-militar. En ese tiempo, para ser implementado el proyecto, la administración se apoyó en violentas medidas represivas, dejando a miles de ciudadanas y ciudadanos desaparecidos, sumado a la represión de personas que sufrieron la prisión y el exilio, a fin de acallar por la fuerza la protesta colectiva a la aplicación del proyecto. Dicha experiencia autoritaria estuvo orientada a poner

en vigencia aspiraciones fundacionales de un nuevo perfil de la sociedad argentina, profundamente regresivo desde el punto de vista social, con el consiguiente impacto en la destrucción de actividades productivas de capital nacional, un creciente proceso de desempleo en el sector industrial y una generalizada inequidad en la distribución de la riqueza (Rofman, 1999, 2000, 2012).

El plan culminó con una crisis sistémica en 1983, que aceleró el fin de la dictadura y permitió la entrada nuevamente al régimen de representación democrática, con un gobierno que atravesó momentos de intensas turbulencias provocadas por los efectos, en el tiempo, de la experiencia neoliberal económica y contribuyó a la derrota electoral del partido de ideas moderadas que había sucedido al régimen militar represor.

En el año 1989 asume el gobierno el presidente Carlos Menem, de perfil peronista neoliberal. Ese gobierno, en 1991 aplica un modelo económico basado en los principios clásicos del monetarismo, que es denominado de “convertibilidad”, supuestamente destinado a combatir de raíz al proceso inflacionario galopante que se produjo en las postrimerías de 1989 y prosiguió en los dos años subsiguientes.

Para combatir a la hiperinflación se obliga al Estado a implantar una estrategia de contención de la emisión monetaria a partir de la obligatoriedad de que el Banco Central Argentino (BCA) requiera que el valor de la masa monetaria circulante se debe ajustar al volumen de las reservas en moneda extranjera de dicho banco. Como se señaló anteriormente, se establece así un sistema de canje libre entre el dólar y el peso, cuya cotización se establece en una paridad totalmente ficticia (uno a uno), con el compromiso de que si las reservas del BCA se reducen, se disminuye el nivel del circulante disponible en el BCA y en poder de las personas. Así, sólo tal base monetaria se puede expandir si aumentan las reservas en moneda extranjera en poder del citado banco. El tipo de cambio queda congelado en la relación uno a uno, dándole al capital financiero especulativo la posibilidad de extraer excelentes rentas si se invierte en el sistema financiero interno a tasas elevadas y se reexportan luego de un tiempo en la moneda en que se incorporó al país. La inversión financiera reemplaza a la que se requiere para incrementar el nivel de la producción, y el negocio especulativo se convierte en la principal fuente de ganancia de un sector caracterizado de inversores de corto plazo con las reservas de dólares. Al mismo tiempo, la deuda pública en dólares que se había expandido durante la dictadura, obliga —para ser amortizada en tiempo y forma— a vender activos estatales (empresas públicas que se privatizan). Este ingreso de divisas para pagar deuda, a falta de otras fuentes genuinas, cubre la demanda de divisas para el objetivo precitado hasta que el agotamiento del proceso de ventas de activos en poder del Estado significa una

barrera infranqueable para detener la “bola de nieve” del endeudamiento, única opción disponible si no hay recursos en poder del Estado.

Cuando a finales de esa década no hay más activos para vender, el modelo se agota, pues no hay más ingresos extraordinarios y la balanza comercial se torna negativa por la revalorización de nuestro peso debido al congelamiento de la paridad cambiaria. El gobierno neoliberal dura hasta el año 1999, cuando por resultados de las elecciones gana el gobierno por una alianza del partido radical con ciertas fuerzas reformistas. Esta alianza no modificó el modelo económico de “convertibilidad fija” y el derrumbe se tornó inevitable dos años después. La deuda crecía porque se renovaba con el peso de los intereses, hasta que en un momento los acreedores (fines de noviembre del 2001) resolvieron no prestarle más al gobierno argentino ante la inseguridad de su capacidad de repago. Sobrevino el previsible derrumbe de todo el esquema económico, lo que llevó a una generalizada crisis del sistema monetario y social a fines del 2001.

Después de un lapso de transición plena de incertidumbres políticas y sociales, se va consolidando la conjunción de las fuerzas políticas y económicas que van encauzando la salida de la crisis, la que comienza con la estrategia de acumulación que implementa el gobierno de Néstor Kirchner a partir de mayo del 2003, de perfil neodesarrollista y valorativa del aporte del trabajo como principal motor de crecimiento.

Es ineludible hacer referencia a que en el desarrollo histórico el proceso de acumulación de capital y la distribución del excedente se centró en la etapa del neoliberalismo, en la valorización financiera y en el predominio del mercado como espacios sobresalientes, mientras en el interior de las relaciones sociales, se dirimían los conflictos económicos y sociales, propios de las tensiones que se ampliaban por efecto del modelo económico liderado por los sectores más concentrados del capital nacional e internacional (Fidel, 2013, 2014, 2015, 2016).

A la vez, en respuesta a la gravedad de los efectos sociales regresivos generados por la aplicación irrestricta de las recetas del capitalismo neoliberal, surgió un proyecto respaldado por el rol principal del trabajo como generador de valor y en el que el Estado asumió un papel prominente para compensar y superar las desigualdades estructurales de un capitalismo feroz y desigual.

Desde su evolución fundacional, el país transitó —en su devenir histórico luego de la Organización Nacional de 1853— por dos modalidades diferenciadas de crecimiento expresadas en una puja permanente entre dos matrices de procesos de acumulación capitalista. Uno, el predominante entre 1853 y comienzos de la década de los cuarenta (en el siglo pasado) a través de un proyecto librecambista de cuño liberal, agroexportador y de definida

inserción en la división internacional del trabajo, en ubicación subordinada y dependiente impuesta por el capitalismo a escala internacional, en la cual un grupo reducido de actores se apropiaba del excedente que se generaba por aprovechamiento de las ventajas comparativas estáticas de la fertilidad de las tierras agrarias, que posibilitaba el proceso agroexportador muy potente vigente hasta la crisis de 1930.

El otro esquema productivo signado por una visión de ruptura, aunque sea parcial con el rol de economía subordinada al capital internacional, adoptando una estrategia de ampliación de la producción económica, se verificó en periodos nunca muy extendidos, en donde se intentó avanzar en la concreción de los derechos y aspiraciones de las mayorías populares a partir de un patrón de acumulación independiente. Para ello, utilizó los atributos esenciales de una estrategia económica y social atada al predominio central del mercado interno como ámbito privilegiado de resolución del perfil productivo, de la distribución del ingreso y participante dinámico del proceso de sustitución de importaciones, a partir del impulso a la industrialización pesada, semipesada y liviana al interior de nuestras fronteras.

Esa estrategia se contrapone al modelo llamado neoliberal, configurando un proyecto caracterizado por la vigencia de un régimen de valorización de la fuerza de trabajo, aumentando el valor del salario real y el fortalecimiento de la capacidad de consumo de bienes manufacturados de origen nacional. En tanto, se va definiendo un sistema económico de carácter mixto, con presencia activa del Estado para propender la igualdad social y la distribución crecientemente equitativa de los ingresos de sus habitantes e intentando desvincularse del dominio del capital financiero concentrado, a través de la reducción significativa de la deuda externa en dólares y del correspondiente peso de los intereses de dicha deuda sobre el presupuesto nacional. Este esquema se hizo evidente en todo el tramo final de la primera década de este siglo bajo la conducción presidencial de Néstor Kirchner, primero, y después de Cristina Fernández de Kirchner. Esta etapa reciente del proyecto nacional, con avances y retrocesos, con no pocas asignaturas pendientes significativas, funcionó en Argentina desde la brutal crisis económica y social de fines del siglo XX y el cierre del año 2015.

A lo largo de esa década y media, el gobierno recorrió un sendero muy novedoso que se adaptaba y sorteaba los obstáculos internos y externos, por lo que podríamos marcar varias fases en la búsqueda de diseñar un modelo de mayor ocupación y valorización de la fuerza de trabajo, asociado a la generación de una amplia e innovadora política de inclusión social y extensión de los derechos ciudadanos.

Primero se sostuvo en un aprovechamiento integral de los significativos ingresos tributarios sobre los productos del sector primario exportables im-

pulsados por los altos precios internacionales. Posteriormente se basó en la fortaleza del salario real y de la búsqueda del pleno empleo de los recursos de capital y trabajo interno, aunque experimentando dificultades para repetir las elevadas tasas de crecimiento económico del tramo 2003-2010, ante la carencia de ingresos en divisas suficientes para sostener el proceso de transformación de la base productiva interna con capacidad de desarrollo autónomo desligada del oneroso capital internacional.

Esa estrategia político-social impulsó una intensa transferencia de flujos de ingresos destinados a la población más desposeída. A la par, empujados por la ampliación de la demanda interna, especialmente concentrados en los sectores que producen los bienes salarios, se instrumentaron medidas gubernamentales para sustituir las importaciones de bienes y servicios, con estímulos en la investigación e innovación, que resultó en la reindustrialización de la economía.

El diseño y aplicación de esa estrategia requería de un alto grado de soberanía y autonomía del proyecto. Es por ello que se cortó todo vínculo con el FMI. Se descartó de modo sistemático la imposición de las recetas de los organismos multinacionales de crédito; por ello, se realizaron acciones para renegociar y pagar la deuda externa, lo que llevó a un fuerte desendeudamiento del país.

La estrechez del ingreso de divisas —dada la caída de los precios de los bienes agroexportables— y las restricciones para expandir la economía por el estrangulamiento externo, dificultaron seriamente el desarrollo de la economía en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015).

Las elecciones del año 2015, con el cambio de gobierno, implicaron someter a la sociedad argentina a un balance del periodo 2003-2015, que mostraba evidentes avances en generación de empleo, obtención de niveles de salario real promedio inéditos y progresos ininterrumpidos en una más justa distribución del ingreso, pero expresaba problemas derivados de la falta de las suficientes divisas para sostener el proyecto a mediano y largo plazo. Estas dificultades obligaron a adoptar medidas restrictivas de la libre disponibilidad por parte de habitantes y empresas de recursos en moneda extranjera, la llamada “restricción externa”, que produjo irritación en sectores medios y rechazos de exportadores (gravados con fuertes impuesto a las exportaciones) y de las transnacionales, condicionadas para enviar libremente remesas de utilidades y dividendos a sus casas matrices.

Estas circunstancias y una muy intensa campaña de desprestigio liderada por los medios masivos de comunicación, que apoyaban la “liberalización” de las restricciones a las empresas, crearon un clima adverso al gobierno nacional en vísperas de la elección presidencial del 2015.

Principales semblantes del modelo conservador

En noviembre de 2015, con un discurso preelectoral plagado de gestos y promesas difusas, el ingeniero Mauricio Macri superó a su contrincante, por un margen mínimo, en las elecciones democráticas en una votación conocida como “segunda vuelta electoral”. Sin embargo, desde un inicio ejerció su gobierno como si la diferencia hubiera sido muy amplia y tuviera el respaldo total de los ciudadanos para forjar un extenso conjunto de medidas de contrarreformas de los beneficios sociales y económicos heredados de la gestión presidencial anterior. La estrategia de gestión fue adoptar un gobierno de estilo empresarial, conformando una capa de operadores gubernamentales, con gran parte de los funcionarios que ocupan los lugares más importantes que provienen de las cúpulas de las empresas privadas.

Desde un inicio, el gobierno de la Alianza Cambiemos ejerció la administración para durar por lo menos dos periodos, estableciendo las bases para la construcción de un modelo extractivista de crecimiento basado en los negocios agroindustriales destinados a la exportación y la ampliación de la renta financiera, como en las décadas de fines de los ochenta y los noventa del siglo pasado. Sustentado en ese esquema estratégico fue reorganizando la estructura de la sociedad y del Estado; instalando nuevos cauces y formas de acumulación y distribución desigual de la riqueza, concentrado el ingreso en la cúpula del poder económico y financiero.

El gobierno de Macri encontró un país altamente desendeudado con un trazado de política social sustentada en programas de transferencias progresivas de ingreso y con avances significativos en el desarrollo de los procesos productivos y de distribución, basados en la organización de actividades encuadradas en la “economía social” (Corragio, 2011).

En los primeros días, el equipo de gobierno aprovechó a fondo el lapso de su gestión inicial donde la reacción opositora no se manifestó. Las citadas decisiones supusieron otorgarle al sector agroindustrial exportador —altamente concentrado en la propiedad de la tierra en pocas manos, y que cuenta con la colaboración de núcleos exportadores muy poderosos— beneficios extraordinarios a través de la reducción de impuestos a las ventas al exterior y de la devaluación del peso. Estas actividades, además, se encontraban respaldadas por sectores financieros que solventaban la siembra, la cosecha y comercialización de cereales y oleaginosas destinada al mercado mundial. De este modo, dicho sector privilegiado captó rentas de la tierra y de la actividad financiera muy elevadas a costa del salario real de los trabajadores que vieron cómo crecía en forma desmesurada (el 40% en los primeros doce meses) el costo de los bienes y servicios de subsistencias (alimento, vestimenta y tarifas de luz, gas, agua y transporte). En ese periodo se registró una

fuerte transferencia de ingresos a los actores más concentrados que operan en el sector primario, para acentuar el esquema de producción sojero que viene instalándose en el campo, extendiendo la obtención de rentas extraordinarias a otros productos del sector (Giarraca y Teubal, 2008).

Simultáneamente se encaró un fuerte endeudamiento externo del gobierno nacional para financiar el déficit de la balanza de pagos y el del sector público a través de la obtención de préstamos altamente oneroso, favorecido con el muy bajo nivel de endeudamiento heredado de las gestiones anteriores. El funcionamiento de los diversos niveles de los aparatos del sector público, las remesas de utilidades y dividendos producto de la inversión extranjera, la amortización y pago de intereses de la deuda estatal, los viajes al exterior y la compra de divisas sin límites para atesoramiento por particulares y empresas, comenzaron a ser saldadas con recursos externos. El rojo en las cuentas públicas se acrecentó sensiblemente al bajar los impuestos arriba consignados, sumados a que cae la actividad económica por la reducción del consumo popular y fracasa el proceso devaluatorio como supuesto estímulo a las exportaciones. En ese contexto, la balanza comercial no ofreció signos positivos para obtener recursos genuinos, y los dólares que ingresaron fueron casi exclusivamente para ser destinados a la especulación financiera. De cada cinco dólares que ingresaron con total libertad y sin ningún control al país, desde el inicio del año 2016, sólo uno acrecentó la inversión productiva. El resto se orientó al negocio de compra de bonos estatales, que rendían una muy elevada tasa de interés (del 26% a los 30% anuales), situación desconocida en cualquier otro país del mundo.

En la dimensión monetaria, es de señalar que en el régimen anterior, la alta ocupación del empleo y el nivel del salario por sobre la tasa de inflación, generaban un nivel de demanda global en permanente ascenso. El nuevo gobierno produjo una fuerte devaluación, la que, por el aumento de los precios internos resultó en una reducción del salario real.

Esa pérdida del valor del salario fue estimada, a nivel oficial, en el primer año de gobierno neoliberal, entre ocho a diez puntos porcentual del salario promedio, según los diferentes sectores productivos. Este año, las negociaciones salariales entre sindicatos y empresas, y la remuneración del sector público a sus empleados, sólo han servido para compensar el incremento de precios esperado para todo el año 2017. El gobierno lo calculó a inicios del año en un nivel no superior al 17%, pero estimaciones privadas a nivel empresarial ya lo han recalculado en el 23% o 24%, o sea que la relación sindical-empresarial y el Estado han convalidado de forma definitiva la caída del poder adquisitivo de los sectores populares en cerca del 10%, y esa reducción de la capacidad de compra de la población de ingresos medios y bajos

ha quedado definitivamente confirmada y no forma parte de una discusión pendiente en el seno de la sociedad.

Ante el debilitamiento de la demanda interna que hace 20 meses viene cayendo en forma sistemática el valor de las ventas en pesos constantes del comercio minorista (según la central empresarial CAME), el gobierno pretende que el crecimiento económico venga por el lado de la “oferta”. Es decir, que se aumente la tasa de inversión y el monto de las exportaciones. Esta estrategia económica descansa en la idea teórica del pensamiento de la economía ortodoxa de que la oferta crea su propia demanda. De este modo se postula una visión opuesta del proceso de crecimiento vigente durante el lapso 2003-2015. En esta estrategia se omite toda consideración a los niveles de la demanda que no estén asociados directamente a la creación de bienes y servicios necesarios para impulsar la oferta de inversión y de las exportaciones.

Esta visión del modelo de acumulación es fundamental para comprender los cursos de acción que la política económica va adoptando. Así, la expansión debe buscarse a partir del estímulo a los empresarios para que inviertan, pero sin asegurarles otra salida a sus productos que lo que les garantiza la vía exportadora. Esta ruptura, entre oferta como variable autónoma del crecimiento y demanda como variable dependiente, desacopla a toda iniciativa destinada a fomentar el consumo interno que, en otras palabras, implicaría una política de ingresos y salarios robusta. Los grandes grupos económicos operan así como eslabones para fortalecer el comercio internacional y se desempeñan en un escenario restringido a aquella producción que tiene ventajas comparativas estáticas como ya las consignamos. La consecuencia fundamental de este proyecto es que el salario es definitivamente un costo, a incorporar a los criterios de rentabilidad que se manejan para competir internacionalmente.

La visión de este modelo de crecimiento, de neta adhesión a la visión ortodoxa, deja librado a las fuerzas del mercado la potenciación de su actividad, que depende del libre intercambio de bienes y servicios a nivel internacional. El aprovechamiento integral de las ventajas comparativas naturales supone un corsé rígido en el tiempo que reduce la capacidad de innovación y congela el modo de inserción de la economía nacional en el ámbito mundial. Para ello es fundamental la plena apertura de las fronteras nacionales y la reducción de costos como consigna central para ser un espacio económico competitivo inserto en el mercado mundial. Descarta la exploración de la posibilidad de abrir la economía a la innovación tecnológica para crear eventualmente ventajas competitivas dinámicas, sólo posibles si efectivamente se adopta un proyecto estimulador de la apertura a la investigación

científica articulada a la industria que promueva la aplicación de cambios tecnológicos.

El modelo actual desestimula toda medida proteccionista que pueda eventualmente trabar el ingreso de insumos a menores costos de los que se podrían producir internamente, y se estimula la incorporación de bienes de consumo o de inversión que reduzcan los costos productivos.

En la medida que el proyecto ortodoxo o de restauración conservadora tiene un fuerte vínculo con la especulación financiera a nivel internacional, también se postula la plena apertura de los flujos monetarios desde y hacia el país. Para atraer capitales especulativos, la tasa de interés se mantiene con un fuerte sesgo positivo, superior a la tasa de inflación, lo que acelera la inversión de corto plazo para especular, y se contiene cualquier aumento de precios-costos que dañen la competitividad internacional en permanente búsqueda. Una tasa de interés pasiva elevada, además sirve como herramienta para desalentar inversiones —sobre todo de las pequeñas y medianas empresas— destinadas al consumo interno, a fin de no crear demanda elevada por la expansión laboral, pues ello provocaría los consiguientes reclamos salariales que perjudicarían el objetivo de bajo costo de la fuerza de trabajo. El nivel de recursos para inversiones productivas descansa en este enfoque básicamente en la confianza de la política económica oficial que la vigencia de un mercado sin restricciones ni regulación estatal, la libertad de girar dividendos y utilidades a las casas matrices y el libre juego de los movimientos financieros impulsará automáticamente la inversión productiva de origen externo y en el paso siguiente: “lloverán dólares”, como prometieron a poco de instalarse las nuevas autoridades. Pero como ya dijimos, los ingresos de dólares sólo sirven, en su gran mayoría, para la inversión especulativa (la llamada “bicicleta financiera”) y las bajas entradas de ahorro externo en el año 2016 no ha alcanzado ni siquiera para financiar las remesas de las filiales a las casas matrices de las multinacionales. El sistema financiero, entonces, se convierte en una fuente privilegiada para generar elevada tasa de ganancia al capital concentrado y no cumple la función de prestar recursos a los pequeños y medianos empresarios. El crédito a las empresas fue el año pasado menos de la mitad que el promedio para los principales países latinoamericanos.

Esta construcción del modelo de acumulación de la restauración neoliberal requiere además de una política desvalorizadora del precio de la fuerza de trabajo. En ese sentido, desde que asumió la Alianza Cambiemos en diciembre de 2015, se registró en la industria una pérdida de 58 mil puestos de trabajo (dato sin estacionalidad). Este año la caída de la producción industrial es menos negativa e incluso se ha tornado positiva desde mediados de año,

pero siempre en relación a los datos muy deprimidos del año 2016, lo cierto es que todavía no ha logrado alcanzar el nivel del año 2015.

Sin embargo, es de señalar que esa relativa recuperación refleja el impulso de los sectores que son inestables en las contrataciones y/o de baja intensidad en el uso de fuerza de trabajo. Tal es el caso del empleo que genera la obra pública y las exportaciones de la actividad agropecuaria más concentrada. En el caso de las inversiones estatales en infraestructura, realizadas en vísperas electorales, son funcionales para obtener adhesión en la renovación parlamentaria de octubre de este año, pero de dudosa permanencia luego de dichos comicios dado el elevado déficit fiscal que tal estrategia ha generado.

La repetida insistencia en el discurso gubernamental fue convertir el país en un “supermercado del mundo”, se contradice con la información oficial que marcó una fuerte caída de la producción industrial hasta mediados de este año y la leve recuperación posterior aún muy distante de compensar las fuertes pérdidas entre noviembre de 2015 y junio de 2017. En la actividad alimenticia, en 2016 se expulsaron casi dos mil puestos de trabajo netos, y en los últimos meses continuó siendo paradigmático el conflicto en torno al cierre de la planta de productos alimenticios Pepsico, decisión oficial avalada por el mismo gobierno que adoptó una posición activa y represiva a favor de la empresa (Instituto de Trabajo y Economía-Fundación Germán Abdala, 2017).

Esta estrategia económica, que descarta a la fuerza de trabajo en su rol de consumidor y se centra en considerarla un costo que hay que reducir en forma, como en el caso del ejemplo citado, acentúa la sensación de generalizado temor a la pérdida del empleo, sensación que se nutre en las condiciones reales de disminución del trabajo asalariado, lo que desalienta reclamos laborales de los trabajadores.

Ante las diversas respuestas defensivas de los sindicatos que responden a los intereses de sus bases, conjugado a los movimientos sociales populares y de los desempleados, la respuesta gubernamental fue incrementar las medidas represivas callejeras.

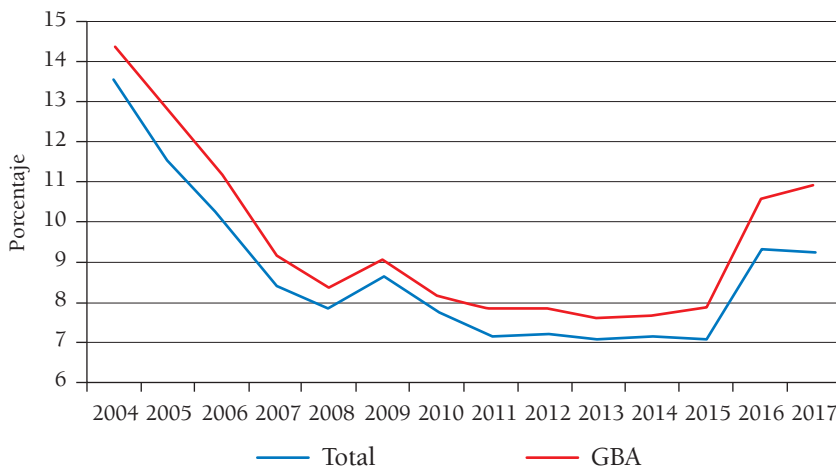
Esta situación de tensión y roce se fue profundizando y ampliando, lo que ha generado un contexto social poblado de conflictos concentrados en las calles de la ciudad de Buenos Aires, por ser este escenario el de mayor visibilidad relativa de país.

Desde el año 2016 —cuando asume la Alianza Cambiemos— comienzan a subir los niveles de desempleo, como resultado de la disminución del gasto estatal destinado a la obra pública (ahora en transitorio repunte), sumado a la reducción de la demanda global de la economía por efecto de la brecha ya comentada entre salarios e incrementos de precios, en donde los

últimos crecieron más que los bienes y servicios de consumo popular. Otro componente inflacionario fue el aumento de las tarifas de los bienes y servicios de consumos colectivos, ofrecidos por empresas de capital extranjero, que acumularon elevadas ganancias.

En la gráfica 4 se puede observar el comportamiento del desempleo en los últimos años. Así se puede advertir cómo en la gestión anterior fue disminuyendo el desempleo como resultado de las políticas orientadas a crear nuevos puestos de trabajo que resultaban de consolidar el mercado interno y fortalecer las políticas sociales. En cambio, en el tramo más actual (fines del 2015 en adelante) los niveles de desocupación de la fuerza de trabajo económicamente activa se incrementaron de modo sustancial.

GRÁFICA 4
TASA DE DESEMPEÑO URBANO SOBRE PEA TOTAL DEL PAÍS Y GBA, 2004-2017
EN PORCENTAJES



FUENTE: elaboración propia sobre datos de la EPH. Indec. Ministerio de Economía. Citado en el trabajo en proceso de publicación: “Política de hábitat y vivienda: un modelo extractivista urbano en la Argentina actual”. Autores: Carlos Fidel, Raúl Di Tomaso y Cristina Farias.

El desmonte permanente de las políticas de las condiciones de bienestar de la población, la flexibilización las reglas de funcionamiento del mercado laboral, la eliminación de la trama de líneas que conforman los beneficios sociales o su recorte, son entre otros los elementos constituyentes de las políticas centrales para bajar costos de la reproducción de la fuerza de trabajo.

En dicho sentido se retoma el camino gubernamental en la dimensión social en el proceso de elaborar los instrumentos de la antigua receta neoliberal, adoptando las siguientes medidas:

- Construir de modo gradual los instrumentos que destruyan gran parte de los soportes de la política social gubernamental existente, especialmente aquellos basados en los canales institucionales por donde transitan las transferencias de ingresos destinada a los segmentos más pobres de la sociedad.
- Mantener el flujo monetario destinado a ciertas organizaciones populares que contienen a los desempleados, de este modo presiona y limita una de las partes más activas y encendidas de la protesta popular.
- Socavar los sostenes institucionales de los signos democráticos del sistema legal.
- Desbaratar a los movimientos sociales, organizaciones políticas y sindicales que disienten con la actual propuesta gubernamental, abriendo mecanismos represivos sobre las expresiones callejeras de la protesta social.
- Instrumentar mecanismos gubernamentales tendientes a debilitar y/o eliminar los controles y las regulaciones ambientales.
- Flexibilizar el mercado laboral y, como ya se explicó, tender a la baja del salario real.

Los anteriores componentes se encuadran en un esquema de achicar el gasto público, especialmente el destinado a mejorar las condiciones materiales de vida de los segmentos de menores ingresos, y las funciones generales del Estado que corresponden a la afirmación de los derechos sociales adquiridos por parte de la población más desprotegida.

Enfocando otros escenarios de la dimensión económica, es de observar que otra vía a fin de asegurar la presencia crecientemente competitiva de los productos a exportar de bienes elaborados a partir del uso de los recursos naturales, consiste en la estrategia de baja de los impuestos y el permanente alegato a favor de la eliminación del rol del Estado como productor, en la medida que es una puerta de entrada al gasto público y por ende generadora potencial del déficit fiscal.

Lo cierto es que el déficit fiscal se produce básicamente como resultado de la eliminación de gravámenes a las transacciones al exterior de bienes agropecuarios producidos con ese particular destino o cultivados tanto para el mercado interno como el de fuera de nuestras fronteras (como el trigo y el maíz), sumado a la reducción de las retenciones impositivas a la exportación de oleaginosas. A ello se agrega la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras. Estos dos rubros han creado una merma significativa de ingresos estatales, los que no se han suplido con ingresos adicionales, por las razones ya expuestas. Sólo se han obtenido recursos extraordinarios fruto de un blanqueo generalizado de inversiones en el exterior no declaradas, pero

este apoyo es por una sola vez y ya se lo consumió el gasto público. Es de notar que el modelo de la restauración neoliberal aspiró a que las citadas medidas de ajuste de los precios relativos estimularan la venta de los bienes respectivos a adquirentes externos al país. No tomaron en cuenta el cambio negativo experimentado en las tendencias de la demanda mundial de dichas mercancías. El bajo dinamismo del comercio internacional (creció en un 1.5% en el año 2016 con relación al valor alcanzado un año anterior) resultó en un valor de solamente una cuarta parte de lo que el comercio internacional se expandía antes de la crisis mundial del 2008.

Paralelamente se registra una expansión del déficit fiscal creada por la reducción de la actividad productiva, sumado a que la recaudación fiscal se contrajo por la caída del impuesto a las ventas (IVA), el efecto de la recesión afectó en el rubro de impuesto a las ganancias y el achicamiento de los gravámenes a las exportaciones ya citado. Para compensar los efectos del déficit fiscal a nivel nacional y el de la gran mayoría de las provincias (se estima que el del año 2016 resultó más elevado que el del 2015 en porcentaje del PBI), el gobierno se encaminó a tomar prestado financiamiento de fuentes del exterior en moneda fuerte, particularmente el dólar.

El incremento de la deuda pública en dólares ha creado un escenario de creciente desconfianza no solamente en quienes no comulgan con esa estrategia, sino también en voceros de los intereses del capital financiero concentrado a nivel internacional. No son pocos los que temen que en el futuro se reitere la crisis de endeudamiento que estalló en los años 2001-2002. Uno de los factores es que los intereses pactados por el gobierno en los préstamos son similares a los que se pagaban antes del cobro por los denominados fondos “buitres” de sus ilegales exigencias, signo que en el mercado financiero internacional sobrevuela la falta de confianza sobre los resultados de la estrategia que aplica el gobierno a partir de la supuesta normalización del mercado cambiario. Para este año, esos intereses —que se habían reducido al 1.5% del PBI luego de la reestructuración de la deuda pública— han vuelto a crecer en su incidencia presupuestaria, y según estimaciones, varias ya alcanzan al 2.3% del PBI, y dado que no se produjo la esperada caída de las tasas cargadas a los préstamos del exterior, seguramente seguirán creciendo. A esa situación hay que considerar la tendencia a la elevación de las tasas si en Estados Unidos se produce una elevación del costo del dinero para préstamos internos decidido por el Banco de la Reserva Federal.

Además, el desmedido aumento de la deuda externa fue uno de los factores que aumentó el volumen de moneda extranjera en el circuito financiero nacional, lo que ha impulsado la revaluación de nuestro peso.

Esta mezcla de procesos es estimulada por el gobierno por varias e importantes razones. Entre ellas se destacan la estrecha asociación entre los

que dirigen la política económica estatal y los grupos financieros internacionales de todo tipo, con beneficios en dólares relativamente altos a nivel global, lo que refleja el elevado riesgo de las apuestas financieras locales, de modo similar a lo acontecido en la década de los noventa.

Así, en el momento de escribir este trabajo, en el periodo del gobierno en estudio, se puede observar que las emisiones de deuda en moneda extranjera por todo tipo y destino se acercan a los 100 mil millones de dólares. Simultáneamente si se suman la salida de divisas por atesoramiento más los pagos de dividendos y lo que se destinó al rubro de turismo, se contabilizan 35 750 millones (informe del Observatorio de Deuda Externa [ODE] de la UMET, 2017). El saldo nutre las reservas del Banco Central que no se componen de dólares genuinos (es decir, de un superávit del comercio exterior, dado que éste es deficitario), lo que implica que la única vía abierta para cancelar el rojo en la balanza de pagos es el endeudamiento permanente.

El atesoramiento en moneda extranjera ha sido una estrategia permanente de los ahorristas en el país instrumentada para prever las consecuencias de las fuertes devaluaciones. Ello explica que los bienes inmobiliarios se coticen desde al año 1975 en dólares.

Si se enfoca el total de la nueva deuda del primer año de gobierno comprendida por compromisos de corto plazo, bonos provinciales más emisiones corporativas, suman 69 796 millones de dólares, y lo sorprendente es que la mitad fueron a surtir la demanda de dólares (Lukin, 2017).

Ahora resulta claro que el discurso oficial de que es beneficioso para todos los reingresos “al mundo”, sólo sirvió hasta el momento para aumentar la deuda externa, no incentivó las inversiones productivas, no aumentó ni diversificó las exportaciones, disminuyó el consumo interno y sirvió para obtener elevada rentabilidad en colocaciones financieras internas, aprovechadas por los inversores especulativos de corto plazo.

Algunos datos relevantes explican la delicada situación del sector proveedor genuino de divisas: el comercio de y para el resto del mundo. Según datos recientes, expuestos por el presidente de la Cámara de Exportadores, Enrique Mansilla, el déficit de la balanza comercial llegará en el año 2017 a más del doble del rojo de 2016 (que conviene señalar alcanzó a 2 128 millones de dólares). El valor estimado por el citado miembro del grupo empresarial más favorecido por la nueva política económica en torno al desequilibrio entre ventas y compras con el exterior, va a sumar para fin de este año la abultada cifra de 5 600 millones de dólares (*Página 12*, agosto 17 de 2017, Buenos Aires, página 8).

Para supuestamente controlar la inflación que no ha cedido y se mantiene en torno a los 22% a 24% anual, acorde con las expectativas de empresarios y consultores económicos periódicamente consultados por el Banco

Central, se apela —por parte del directorio de este banco, que funge como independiente pero que en realidad es un apéndice de la conducción económica gubernamental— a una estrategia estrictamente monetarista. Así, se han emitido bonos de vencimiento máximo a un año y de renovación mes a mes, llamados LEBAC, para controlar la base monetaria y competir con los ahorristas devotos del dólar como moneda de resguardo, con el fin de inducir a los que manejan recursos financieros excedentes a comprar esos bonos. Con esa meta, desde el principio de la gestión actual, se les asignó una recompensa en forma de remuneración-tasa de interés muy elevada. Llegó a ser, al inicio de las emisiones, del 38% anual. Ahora se la ha fijado en torno al 27%. No solamente tiene interesante rentabilidad en pesos frente a la inflación —que ya se dijo va a fluctuar en torno al 23%—, sino que intenta evitar que los ahorros de empresarios y particulares se orienten al dólar para mayor seguridad. Esto ha supuesto una continua emisión de bonos, al ritmo tanto del incremento de las ganancias del sector financiero que los adquiere, sino también por razones especulativas de fondos del exterior: un monto al día de hoy (mediados de agosto de 2017) muy cercanos al billón de pesos, es decir un millón de millones de nuestra unidad monetaria. Ello representa un monto mayor que la base monetaria de alrededor del 30%. La política adoptada implica la puesta en marcha de las denominadas “metas de inflación”, donde se eleva sustancialmente la tasa pasiva del Banco Central sobre los bonos para desalentar el crédito al consumo y a la inversión productiva, pues los agentes financieros utilizan el dato de la tasa de interés como referencia para sus negocios crediticios y de financiamiento del consumo a través de las tarjetas de crédito. El criterio adoptado ha resultado totalmente fallido, dado que de las promesas oficiales del 17% de inflación anual, la realidad la ha desplazado en torno —como ya se citó— al 23%, como piso probable. En rigor de verdad, esta fallida herramienta de encarecimiento del costo del crédito para enfriar la economía e impedir que la demanda empuje al alza los precios y a la compra de la moneda extranjera, es solamente una vulgar pantalla para los grandes negocios de la especulación con títulos públicos, lo que anteriormente hemos llamado “bicicleta financiera”. Esto es ingresar dólares con total libertad al mercado financiero nacional, venderlos por pesos, colocar tales pesos en títulos LEBAC por plazos limitados. Al vencimiento de esas colocaciones (pago de LEBACs por parte del BCA una vez por cada mes o venta en el mercado secundario) se recogen las ganancias en los abultados niveles de interés y se vuelve a comprar dólares, ya sea para ahorro interno o para remesar a los especuladores internacionales. Es un pingüe negocio, pues ofrece beneficios a los compradores de tales bonos, los que considerados en equivalentes de dólares arrojan niveles de ganancias desconocidos en todas las plazas financieras

del mundo. La excusa es controlar la inflación. Pero como hemos visto, su efecto es inocuo. El objetivo real es proporcionar en la era de la globalización financiera, negocios muy rentables a partir de mecanismos especulativos que no exigen ningún nivel de regulación o control.

La elevada tasa de interés interna está determinada por la intención de disminuir el consumo y por ende bajar la tasa de inflación, pero el aumento de los riesgos tiene la consecuencia de que debe afrontar costos elevados en los nuevos préstamos que obtienen las empresas que operan en el país.

Hasta ahora la intención de bajar la tasa de inflación por esta vía no fue efectiva. Hasta los primeros cinco meses de 2017, el ingreso de dólares por endeudamiento y por los manejos financieros altamente lucrativos, deprimió el tipo de cambio y propició el ingreso de bienes importados competitivos de los que se producen internamente, adicionando otro factor que entorpece el crecimiento económico y el empleo, con el consiguiente efecto recesivo. Se crea así un círculo vicioso que daña la producción interna y alienta las importaciones, descolocando las exportaciones.

Al momento de escribir este trabajo hay una serie de factores que hacen pensar en un repunte de la inflación muy por arriba de los objetivos planteados por el gobierno, entre ellos el alza de los precios y tarifas de los servicios públicos que tienden a trasladarse a los precios de mercado; a lo que se agrega presiones sobre el precio del dólar por los sectores concentrados que exportan con su efecto sobre el conjunto de los precios de los bienes que están ligados directamente a esa moneda.

Un relevamiento de este año que comprendió el mes de junio abarcó unos 40 mil precios de bienes y servicios, mostró alzas generalizadas, destacándose el rubro de medicamentos, ramo donde en algunos casos se superó el 30% en el año, mucho más que el índice de precios al consumidor en el periodo anual considerado. Es conocido que estos productos son pocos o nada sustituibles y necesarios para la vida de los habitantes (Instituto de Trabajo y Economía-Fundación Germán Abdala, 2017).

Existe otro factor impulsor del deterioro de tal ingreso, surgido a partir de la actual estrategia de política económica. En el objetivo explícito de contraer el déficit fiscal, una de las variables es eliminando subsidios a las tarifas de los servicios públicos, lo que ha supuesto necesariamente elevadísimos incrementos en el conjunto de dichas tarifas, tales como electricidad, gas, agua para riego, peajes, entre otros (Rofman, 2017).

Los incrementos de las tarifas y precios de los bienes colectivos no solamente reducen la capacidad de consumo de la población que ve disminuido en montos significativos su capacidad de gasto, sino que también impacta en las actividades productivas que encuentran afectados sus costos de modo singular. Los llamados popularmente “tarifazos”, repercuten negati-

vamente en los costos de aquellos establecimientos agrícolas que por sus técnicas productivas utilizan en forma intensiva algunos de los insumos energéticos que han sido afectados por alzas considerables. Es el caso de los cultivos frutícolas de zonas con sistemas de irrigación, de los tambos de leche y de las instalaciones de cría de aves, todos por el uso de energía eléctrica.

En términos de la capacidad de expandir el consumo de producción nacional (y en este aspecto es fundamental el aporte de la producción primaria de las regiones extrapampeanas), el proyecto restaurador neoconservador es francamente recesivo.

El discurso oficial plantea permanentemente la idea de que en un futuro cercano se va a producir una oleada de reactivación económica que se va a derramar en todos los segmentos sociales. En dicho sentido, en el primer año de gobierno se anunció un florecimiento económico en el segundo semestre, expresándose en niveles de crecimiento económico generalizado. La realidad mostró que la regresividad del enfoque global de la política económica, basada en la caída del salario real y del empleo, frustró ese objetivo.

A finales de ese año, en la confección del nuevo presupuesto de 2017, se pronosticó un aumento del 3.5% en el PBI con respecto al transcurrido. Pero lo que no se aclaró es en qué sectores productivos y con quiénes como gestores del crecimiento piensan alcanzar esa meta. En realidad, el proyecto no es abarcativo de una amplia gama de procesos productivos que podrían retomar la senda del crecimiento del año 2015. Aspirar a producir una expansión del PBI contando con el aporte de la actividad del sector financiero, del agro pampeano exportador, de las ventas de vehículos automotores (cuyo mayor aporte es la importación y no la producción interna) y de la construcción de obra pública. Esta última cuestión es puramente coyuntural, relacionada con el acto eleccionario de octubre de 2017.

Pero no se prevén cambios favorables sensibles en toda la actividad industrial destinada al mercado interno ni al agro vinculado con la oferta de alimentos para el consumo cotidiano de la población.

El 22 de octubre de 2017 se llevará a cabo la elección de medio tiempo del mandato presidencial, en la que competirá por cargos de senadores y diputados nacionales, según la cantidad correspondiente a cada distrito electoral.

Frente a esta elección, una de las posibilidades es que el gobierno —como ya se expuso— intente mejorar la situación económica y social. La principal carta a jugar por el gobierno en los últimos meses se sustenta en una reactivación de la inversión estatal destinada a la obra pública como recurso para sostener la oferta electoral del oficialismo. Este segmento del sector de la construcción explica sólo un 25% de toda la actividad y, por sí sola, no puede aspirar a impulsar el conjunto de dicho sector. El apoyo a procesos

de especulación financiera, la apertura a las importaciones de bienes de consumo sustitutivos de los que en el país se producen y la intensificación del cierre de establecimientos pequeños y medianos, lo que estimula la concentración del capital, resultan en su combinación factores desalentadores de una amplia reactivación y sólo capaces de concentrarse en los sectores directamente favorecidos por la política oficial. Estos sectores poseen muy reducido eslabonamiento con otras actividades del mercado interno y una muy baja incidencia en la creación de empleo, salvo la ligada a la construcción con fondos públicos que carecen de horizonte futuro postelectoral. El resto de la actividad económica, altamente densa en fuerza de trabajo, que depende del consumo interno, queda al margen de la reactivación programada y difundida como meta oficial.

Esta dinámica de acumulación, parcial y selectiva, está condicionada por los flujos con el exterior cuyas cantidades y precios no se fijan en Argentina, sino que son datos del comercio mundial hoy en depresión. El proceso de revaluación del peso ha seguido en los primeros meses del año 2017. Aunque una presión devaluadora en marcha prohijada por los grandes capitales asociados a la agroexportación ha logrado cierto reajuste del valor del dólar hacia arriba a mitad del año 2017. Aunque ello se mantuviese tendría que modificarse la tendencia a la baja de los precios de las *commodities* que obstaculizaría el beneficio de recibir por los financistas y dueños de campos destinados a producir trigo, maíz y soja, que constituyen la canasta básica agroexportadora. Las cosechas de tales bienes agrícolas de fuerte incidencia exportadora crecieron hasta mediados del 2017, pero no existen buenas perspectivas para las próximas siembras de verano (especialmente soja) por la elevación de costos y caída de precios finales. De ahí que el déficit comercial tendería a mantenerse, habida cuenta de lo arriba expresado y del incremento de las importaciones de bienes de consumo durables o no.

Este descenso pronunciado del tipo de cambio real multilateral acompaña —como ya explicamos— el crecimiento de las importaciones que compiten con los bienes primarios producidos o manufacturados dentro del país en un proceso de apertura que ya en la década de los noventa produjo daños elevados a la industria y al agro nacional. Las facilidades dadas al ingreso de productos primarios o industriales desde el exterior obedecen a dar satisfacción a grandes grupos transnacionales, algunas que están establecidas en el país abandonan o reducen la producción de sus planes productivos locales reemplazándolos por compras fuera del país y/o se ajustan a los intereses de empresas externas que desean colocar saldos productivos a precios de dumping. Así esta política aperturista desplaza fuerza de trabajo nacional por la localizada en el exterior.

A esta altura del trabajo conviene abrir algunos interrogantes: ¿Por qué si este modelo que acentúa la producción primaria y estimula la apertura irrestricta al mercado mundial término en crisis cada vez que se intentó aplicar, se reitera el intento? ¿Qué significa en términos de estímulo para la producción y las condiciones de vida un modelo de crecimiento parcial, centrado en expandir sectores fuertemente vinculados al capital extranjero concentrado y de muy baja demanda laboral, salvo la construcción en el sector público cuyo estímulo estimamos se va a ralentizar pasadas las elecciones de octubre?

Es que lógicamente, una expansión general de la producción destinada al mercado interno, con el conjunto del comercio y los servicios a este vinculado, resultaría en un aumento del volumen de actividad productiva demandante de más fuerza de trabajo y estimulante del incremento del salario real. Y como el proyecto tiene un eje central en la agroindustria exportadora, un esquema de fortalecimiento del consumo de los sectores de menor ingreso implicaría aumentos de salarios y, por ende, de costos y pérdida de competitividad. Las perspectivas a corto y mediano plazo, entonces centradas en el robustecimiento de las pequeñas y medianas empresas, en el aumento del empleo y en el incremento del salario en términos reales, lucen totalmente desvinculadas de los objetivos gubernamentales.

En síntesis, en un marco de niveles de comercio mundial deprimido y con la economía brasileña contraída, a las que se destina aproximadamente el 30% de las exportaciones en el marco de los acuerdos del Mercosur, el resultado es que las exportaciones crecieron muy poco, por el envío centrado en los productos primarios que tuvieron mayor incidencia en relación a las decaídas ventas externas de bienes de origen industrial.

La primarización exportadora es una tendencia inevitable del modelo económico vigente. La industria es el convidado de piedra en esta nueva lógica. Todo lo expuesto aconteció en un escenario de elevada capacidad instalada ociosa para el sector manufacturero (este sector trabaja al 60.5% de su capacidad instalada, 20 puntos menos que dos años atrás) y deliberada apertura comercial (FIDE, 2017:29).

Las importaciones en cantidad física de bienes de consumo se incrementaron en un 17% en el año 2016. Aunque tales importaciones —que han competido, como ya se dijo, con la producción local de insumos o alimentos proveniente del agro— no sean muy significativas, se han incrementado en algunas actividades específicas de modo singular: es el caso de cítricos, derivados de la leche (quesos), frutas de pepita, vino embotellado y carne porcina (Consultora Radar, 2016).

Este modelo neoconservador se sostiene en los poderes reales que operan en Argentina, en directo entrelazamiento con poderosos núcleos trans-

nacionales, traducidas en corrientes de pensamiento que logran convencer a través del uso de los medios de comunicación, sumado al apoyo de los sedimentos ideológicos más retrógrados instalado en los segmentos sociales de ingresos medios-altos y altos de la sociedad, económicamente favorecidos por el proyecto instalado en el año 2015.

ALGUNOS EFECTOS DEL MODELO ECONÓMICO

Trasladando el enfoque al mapa de los sectores que configuran los protagonistas ganadores y perdedores resultantes del giro de la política económica que se inició en diciembre del 2015, un reciente análisis permite observar cuáles actores lograron ventajas y cuáles descendieron en su participación en la generación de valor agregado de toda la economía. A continuación los presentamos clasificados según los grandes sectores productivos.

TABLA 2
ARGENTINA. ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE AVANZAN/RETROCEDEN EN TÉRMINOS DE SU INCIDENCIA EN EL VALOR AGREGADO BRUTO TOTAL, EN PORCENTAJES

<i>Avanzan</i>	2015	2016	Variación
Agricultura, ganadería y silvicultura	7.70	12.00	5.39
Intermediación financiera	3.90	4.30	0.39
Electricidad, gas y agua	1.30	1.60	0.32
Explotación de minas y canteras	3.90	4.10	0.17
Servicios sociales y de salud	5.80	5.90	0.14
Hogares privados con servicio doméstico	0.90	0.90	0.03

<i>Retroceden</i>	2015	2016	Variación
Industria	17.10	15.70	-1.49
Construcción	5.30	4.30	-1.02
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	11.30	10.70	-0.66
Comercio mayorista, minorista y reparaciones	14.30	13.70	-0.60
Administración pública, defensa, etc.	9.30	8.70	-0.57
Enseñanza	6.30	5.90	-0.40
Transporte y Comunicaciones	6.80	6.60	-0.25
Hoteles y restaurantes	2.30	2.10	-0.22
Otras actividades de servicios comunitarias, soc. y pers.	3.50	3.30	-0.18

FUENTE: Francisco Cantamutto y Martín Schorr en base a datos del Indec. Citado por José Nantanson, "El macrismo realmente existente", en *Le Monde Diplomatique*, Buenos Aires, febrero 2017, página 2 (Rofman, 2017).

El estudio referido relativo al primer año de la nueva gestión indica que sectores de la producción aparecen como ganadores en su participación en el producto bruto interno. El listado comprende seis actividades económicas

y el que más se elevó entre 2015 y 2016 es el agropecuario. En ese sector que comprende varias actividades también hay tensiones y diferencias en su interior. La producción cerealera, la sojera y en menor medida la ganadera, fueron los principales rubros beneficiarios de la política económica que eliminó o redujo retenciones a la exportaciones, a la par que aumentó la rentabilidad resultante de la devaluación con que comenzó la política gubernamental.

Enfocando el análisis de los productos de modo más detallado, localizados en diversas regiones, hay estudios que permiten observar retrocesos en casi toda la línea de bienes productivos, con las excepciones de los grupos económicos exportadores que se destinan a un consumo de alto poder adquisitivo, por ejemplo: vino varietal fraccionado y consumo de frutas de alta calidad y precio (Rofman, 2017; CEPA, 2017).

El segundo sector que más creció en términos relativos fue el de la intermediación financiera, es decir, todo lo vinculado y/o derivado del sistema bancario que se expandió de modo evidente entre 2015 y 2016. A este sector privilegiado por las políticas de eliminación de restricciones a los movimientos de divisas, le siguió finalmente el rubro de electricidad, gas y agua. Aquí influyó decididamente el nivel tarifario, que se incrementó de modo espectacular.

Si nos desplazamos a los sectores perdedores del año en términos de su participación en el PBI con relación a la medición del año anterior, se observa que el más dañado fue la industria, le siguió en orden de pérdida de participación la actividad de la construcción (en este punto hay que señalar que se contrajo la obra pública y la inversión privada).

Los otros rubros con pérdidas de cierta significación fueron las actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler, el comercio mayorista y minorista, la administración pública y la educación.

Todos estos sectores tienen que ver mayoritariamente con el consumo interno, y como el mismo perdió —según han estimado algunos consultores destacados entre un 3% a un 4% en su nivel de actividad—, ello incidió negativamente en aquellos sectores que le proveen de bienes y servicios a la demanda instalada en el territorio nacional. En 2016 también resultó particularmente dañado el rubro de la actividad estatal, como resulta del achicamiento del sector público en sus distintas jurisdicciones.

Estos últimos meses, por los tiempos políticos de la aproximación de las elecciones intermedias que renuevan parcialmente las cámaras de representantes y por lo que implica una señal de apoyo o rechazo a la estrategia gubernamental, el gobierno incremento parte del gasto y las inversiones estatales en obras públicas en distintos lugares del país, las que hasta este momento tuvieron limitado efecto antirrecesivo en el comportamiento de la demanda global.

La estimación más reciente del FMI sobre el crecimiento económico argentino del año 2017 lo ubica en el 2.5% de signo positivo. O sea, solamente para compensar las pérdidas del 2016. A dos años de inicio del nuevo gobierno, por ello volveríamos al punto de partida, luego que en el año 2015, cuando todavía gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, el ritmo de crecimiento de la economía tuvo un signo positivo del 2.5 por ciento.

¿Qué se espera para el año 2018? El gobierno pretende que el crecimiento económico sea de alrededor del 3.5%. No hay todavía intentos de parte de instituciones universitarias o consultorías económicas acerca de predicciones de cada uno de ambos sectores que poseen espacios especializados en el análisis de la evolución económica.

A nuestro entender, el dato oficial es poco probable que se alcance dado que una primera estimación de especialistas sobre la cuestión agraria anticipan dificultades para emular la expansión acaecida este año por las razones ya expuestas. Un reconocido periodista económico, en una publicación de este mes de agosto de 2017, titula su aporte: “El aumento de costos en dólares frena una nueva campaña récord”. En el texto da cuenta del porqué de ese pronóstico enfatizando la existencia simultánea del alza del gasoil, de fletes, tanto de camiones como de trenes, de insumos para la realización de las campañas agrícolas que tendrán lugar en el periodo 2017-2018 (maíz y soja) o durante el 2018 (trigo). La complicación de los elevados y crecientes costos arriba enunciados impedirían expansiones en las cosechas de trigo y soja, así como pondrían en dudas la de maíz (Merino Soto, *Buenos Aires Económico*, 16 de agosto de 2017). Más allá de estas hipótesis, respaldadas además por caídas en los precios de las tres commodities previsible en el futuro cercano, van a reducir en proporciones aún inciertas el *boom* productivo del año que corre. Por otra parte, ante la urgencia de reducir el déficit fiscal, que se acerca al 6% del PBI para 2017, dos puntos de porcentual más que lo programado, las generosas transferencias de fondos en obras públicas, como factor de respaldo a los candidatos oficialistas para las próximas elecciones de octubre, va a sufrir una inevitable reducción en cantidades no estimadas todavía, pero que van a influir en el sector de la construcción y en la actividad industrial ligada a la obra pública.

Deseamos cerrar este análisis sobre la coyuntura y el desarrollo estructural de la economía argentina a la luz del nuevo modelo de acumulación en marcha desde fines del 2015, con ciertas narraciones que consideramos de alta significación.

Un destacado estudioso de esta problemática recientemente dio cuenta de la situación de nuestra economía frente al progresivo endeudamiento como única opción abierta para obtener recursos en moneda extranjera a fin de saldar los déficits “mellizos”: el fiscal y el externo. Conviene recordar a M. Rajnerman en su aporte analítico: “uno de los principales problemas de la

economía argentina es la escasez de divisas: la mayoría de los procesos económicos de crecimiento que atravesó nuestro país se vieron limitados por la falta de divisas”. Pero en la situación actual los ingresos de dólares financieros superan a los de origen comercial como nunca antes en el último cuarto de siglo. Así, las divisas comerciales avanzaron 2.5% interanual en los primeros seis meses de 2017, según datos del BCA, mientras se registra un salto del flujo financiero, que casi se duplicaron en los primeros seis meses del año actual con respecto al anterior, superando los 48 mil millones de dólares, record histórico. Los dólares disponibles del intercambio comercial son ahora el 40% del total ingresado al país. Por ello, las divisas genuinas que se necesitan para ser repagadas fueron menores a las que tarde o temprano abandonarán el país. La cuenta capital del BCA muestra un ingreso encabezado por emisión de títulos de deuda de cerca de 7 900 millones de dólares en este primer semestre. Luego le siguieron inversiones de portafolio, dólares especulativos que ingresan al país buscando subirse a la especulación financiera rampante vía los LEBACs, que fueron de 5 200 millones de dólares en el mismo lapso. En cambio, la inversión extranjera sólo llegó a la suma de 1 400 millones de dólares en la mitad del año (Rajnerman, 2017).

Es notorio que acumulamos deudas o recibimos dólares para negocios financieros sin ninguna contraparte que asegure inversiones efectivas con capacidad para afrontar el repago.

Por eso, ante este escenario, el analista concluye con una opinión cierta que compartimos: “Cabe preguntarse por qué los mismos hechos que tantos dolores de cabeza nos dieron en el pasado, arrojaron esta vez resultados distintos”.

Poco antes de este texto, otro reconocido economista, concluyó un análisis basado en datos oficiales con el mismo claro y contundente mensaje: “Mientras la obsesión conservadora se concentra en el gasto público y en el déficit fiscal, en tanto el fundamentalismo monetarista sigue concentrado en subir la tasa de interés tras el esquivo objetivo de bajar la inflación, las cuentas externas se están deteriorando a pasos acelerados”. Y concluye: “Esta historia tiene un final conocido” (Alfredo Zaiat, *Página 12*, 23 de julio de 2017, página15).

CONCLUSIONES

Hasta aquí se presentaron los principales rasgos de la aplicación del proyecto de la fuerza de la Alianza política Cambiemos, que desde el gobierno adoptó una gestión marcada por una estrategia neoconservadora.

Fruto del análisis realizado surge la acelerada aplicación del modelo conservador de base extractiva, en donde la formación del excedente se ubica en los sectores primarios y financieros, se nutre de la desvalorización del precio de la fuerza de trabajo, al concentrarse en el negocio financiero, propiciando el proceso de desindustrialización con especial referencia a la disminución significativa de la actividad de las PYMES agrarias e industriales, mientras se intenta, a la par, desmontar formas de intervención estatal reguladoras de los procesos de producción, distribución y consumo.

El modelo neoliberal o neoconservador busca incrementar la oferta global basada en la atracción de inversiones externas y en el estímulo de las exportaciones centradas en la producción primaria exportadora con muy poco éxito en ambas dimensiones de generación de divisas auténticas. Hasta el momento que se escribió este trabajo solamente logro atraer pasajeras inversiones que se orientan a las esferas financieras, las que vía la compra de diversos tipos de bonos estatales buscan rápidas ganancias y están dispuestas a marcharse frente a cualquier nubarrón que los afecte en el horizonte interno o en otro sitio del mundo.

Al mismo tiempo, el saldo comercial muestra un acelerado signo negativo, indicio de serias dificultades a fin de alimentar la demanda de divisas para afrontar el déficit estructural de la balanza de pagos.

Mientras tanto, el gobierno que asumió el control de la política económica en un país desendeudado, usufructuó esa situación ampliando la deuda externa. Es decir, que se incrementa la deuda externa y dichos fondos salen por el circuito del amplio canal de la fuga de capitales, sirviendo solamente para ese objetivo

En lo inmediato, la estrategia gubernamental enfrenta varios desafíos y se abre un gran número de interrogantes. Señalaremos algunos: ¿vendrán en la cantidad y con la rapidez necesaria los capitales productivos del exterior, apuesta en la que se basa gran parte del modelo? ¿Continuará la política financiera gubernamental con el propósito de proseguir estimulando la entrada de capitales externos que buscan ganancias rápidas y están dispuestas también a salir rápidamente; capitales que se desplazan de modo semejantes a los vuelos estacionales de las golondrinas? ¿Se interrumpirá, en algún momento, como ocurrió a finales del año 2001, el flujo de entrada de capitales financieros de corto plazo y/o los préstamos de los organismos multinacionales de crédito? ¿La población organizada o no, tolerará indiferentemente la permanente mengua de los derechos sociales, jurídicos e institucionales? ¿La población organizada o no, soportará pasivamente sobre sus espaldas los aumentos de los costos de los bienes y servicios colectivos, el incremento del desempleo, la extensión de la pobreza y la redistribución regresiva del ingreso que aplica el gobierno?

Estos y otros interrogantes de igual o mayor importancia quedan abiertos para el futuro, que hoy luce incierto y por demás preocupante dada la historia social y económica argentina que mostró en 1982 y en 2001, muy semejantes proyectos restauradores con resultados totalmente insatisfactorios para la mayoría de la población.

BIBLIOGRAFÍA

- Aglietta, Michel (1986), *Regulación y crisis del capitalismo, La experiencia de los Estados Unidos*, México, Siglo XXI.
- Agrovoz (2017), Informe del 17 de febrero de 2017, disponible en <<http://www.agrovoz.com.ar/>>.
- Arceo, Enrique (2003), *Argentina en la periferia próspera, Renta internacional, dominación oligárquica y modo de acumulación*, Buenos Aires, FLACSO-UNQ-IDEP.
- Aronskin, Ricardo (2001), *¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económicas en los '90*, Buenos Aires, Libros del Rojas.
- Azpiazú, Daniel y Hugo Notcheff (1994), *El desarrollo ausente, restricciones al desarrollo, neoconservadorismo y elite económica en la Argentina*, Buenos Aires, Tesis/Norma.
- Basualdo, Eduardo (2006), *Estudios de historia económica argentina, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Basualdo, Eduardo (2001), *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.
- Calcagno Alfredo Eric y Calcagno, Alfredo Eric (2011), *El consenso como totem y tabú*, disponible en <<http://lamingaenmovimiento.wordpress.com/2010/11/07/eric-calcagno-y-afredo-eric-calcagno-el-consenso-como-totem-y-tabu/>>.
- Calcagno Alfredo Eric y Calcagno, Alfredo Eric (2011), *El Resurgimiento Argentino*, disponible en <<http://e-calcagno.com.15.6>>.
- CAME (2016), *Área de Economías Regionales*, Comunicado del 20 de noviembre, Buenos Aires.
- CEPA (2017), Informe, *análisis monetario-financieros julio 2, 2017 la deuda en dólares más que duplica los compromisos "heredados"*, disponible en <<http://centrocepa.com.ar/la-deuda-dolares-mas-duplica-los-compromisos-heredados/>>.
- CEPA (2017), *Informe sobre la situación productiva en las regiones*, Buenos Aires.
- Consultora Radar (2016), *Informe de Coyuntura*, de 19 de agosto a cargo de Español, Paula, Buenos Aires

- Cordera Campos, Rodaldo (2011), “Las desventuras de Mexico en la Globalización”, *Revista de Ciencias Sociales, segunda época*, año 3, núm. 19, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, pp. 25-46
- Cuenya, Beatriz; Fidel, Carlos (2004), *Herzer Hilda (comps), Fragmentos sociales, Problemas urbanos de Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Ferrer, Aldo (2011), “Los problemas fundacionales y la densidad nacional”, *Revista de Ciencias Sociales, segunda época*, año 3, núm. 19, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, pp. 7-24
- FIDE (2017), *Revista Coyuntura y Desarrollo*, núm. 373.
- Fidel, Carlos (2014), “Ciudades Latinoamericanas: dispositivos, tensiones y fisuras sociales”, *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*, Segunda época, núm. 18, noviembre, Clacso, disponible en <<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20141112013548/CuadernoN18-SegEpoca.pdf>>.
- Fidel, Carlos (2015), “Ciudades latinoamericanas, imágenes de la segregación y realidades desiguales”, en *Contrapuntos Blogs Planeta Futuro Diario El País*, disponible en <<http://blogs.elpais.com/contrapuntos/2015/07/ciudades-latinoamericanas-imagenes-de-la-segregacion-y-realidades-desiguales.html#more>>.
- Fidel, Carlos (2015), *Miradas y controversias del desarrollo territorial en Argentina, Aproximación a un enfoque analítico*, Editorial Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.
- Fidel, Carlos (2016), “Ciudades latinoamericanas, representaciones de la segregación y contrastes”, en la *Revista Institucional de la Defensa Pública “Derecho a la Ciudad, Sin justicia social urbana no hay ciudadanía”*, Décimo número, Ministerio Público de la Defensa Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, disponible en <<https://mpdefensa.gob.ar/biblioteca/pdf/Revista-Institucional-del-MPD-Nro.10-Derecho-a-la-Ciudad.pdf>>.
- Fidel, Carlos; Di Tomaso, Raúl; Farias, Cristina (2013), “Salud y Hábitat, Ensamblajes en el Municipio de Quilmes, Argentina” en el libro, *Des Encuentros entre Reformas Sociales, Salud, Pobreza y Desigualdad en América Latina*, Editorial UNQ-CLACSO, tomo II.
- Fidel, Carlos; Raúl; Fariás, Cristina (2014), “Problemas y ensambles entre producción industrial y territorio, Situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Argentina”, *Revista virtual Mundo Urbano*, núm. 43 ISSN 1515-8373, Indexación en LatIndex.
- Fidel, Carlos y Villar, Alejandro (comp.) (2015), *Miradas, prácticas y controversias del desarrollo territorial en Argentina*, compilado por Carlos Fidel y Alejandro Villar, Editorial Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.

- Fidel, Carlos y Gustavo Romero (coordinadores) (2017), “Producción de vivienda y desarrollo urbano sustentable”, 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ediciones del CCC Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, México, Universidad Nacional Autónoma de México, *Colección Pensamiento crítico*; 14; 290 p, ISBN.
- Fidel, Carlos; Raúl Di Tomaso y Cristina Farias, *Política de hábitat y vivienda, Un modelo extractivista urbano en la Argentina actual*, (En proceso de publicación).
- Landriscini, G. (2016), Ponencia Mimeo/UNComahue, “A seis meses de las promesas del nuevo Gobierno en tiempos de devaluación y quita de retenciones, ¿Qué pasa hoy con los productores frente a la nueva temporada, frente al cierre de los embarques a Europa y la caída de la demanda de Brasil?, Neuquén.
- Lukin, Tomás (24 de julio 2017), *Diario Página 12*, “*Entran por una puerta y salen por otra*”.
- Lukin, Tomás (14 de agosto de 2017), Matías Rajnerman, “Límites al endeudamiento”.
- Lukin, Tomás (20 de julio de 2017), Alfredo Zaiat, “Puerta de salida”.
- Lukin, Tomás (23 de julio de 2017), Raul Dellatorre, “El juego de la dolarización”.
- Natanson, J. (2017), nota editorial “El macrismo realmente existente”, en *Le Monde Diplomatique*, Febrero 2017, Buenos Aires.
- Rapoport, Mario (2005), *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)*, Buenos Aires, Ariel.
- Rofman, A. (1999), *Las economías regionales a fines del siglo XX, Los circuitos del petróleo, del carbón y del azúcar*, Ed. Planeta-Ariel, Buenos Aires.
- Rofman, A. (2000), *Desarrollo regional y exclusión social*, Ed. Amorrortu, Buenos Aires.
- Rofman, A. et al. (2005), *Acceso de los pequeños productores al crédito formal e informal, diagnóstico y propuestas*, Ministerio de Economía/Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos/ PROINDER, Buenos Aires, disponible en <<http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/24-documentos/266-acceso-de-los-pequenos-productores-al-credito-formal-e-informal-diagnostico-y-propuestas>>.
- Rofman, A. (2012), *Las economías regionales, Luces y sombras en un ciclo de grandes transformaciones 1995-2007*, Ed. Centro Cultural de la Cooperación y Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.
- Rofman, A. y Fidel, Carlos (2012), “Modelos Económicos-sociales en la Argentina, La Disputa Continúa”, en el libro “*Estrategias económicas exitosas en Asia y América Latina*”, Consejo Nacional de Universitarios México.

- Rofman, A. (2015), “La devaluación que se viene, ganadores y perdedores”, Mimeo, *Documento Interno del Ceur*, mes de noviembre.
- Rofman, A. (2016), “Deudas de la democracias en el ámbito de las economías regionales”, en *Revista Voces en el Fénix*, núm. 52, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Rofman, A. e Inés Liliana García (2017), “Economías regionales en el contexto del proyecto neoliberal en marcha”, mayo, Documento de Trabajo, CEUR- CONICET.
- Schvarzer, Jorge (1996), *La industria que supimos conseguir, Una historia político-social de la industria argentina*. Buenos Aires, Planeta.